

SEPTIEMBRE 2018 / INFORME N°4

**EL BLOQUEO
CONTRA
QATAR Y LA
RECONFIGURACIÓN
DE LAS ALIANZAS
EN MEDIO ORIENTE**

Por Mariela Cuadro

**VÍAS NAVEGABLES,
DESARROLLO E
INTEGRACIÓN ECONÓMICA.
ENTREVISTA
A HORACIO TETTAMANTI**

*Por Manuel
Valenti Randi*

**GEPOLÍTICA DE LA
TECNOLOGÍA DESDE LA
SEMIPERIFERIA**

Por Diego Hurtado

(DES)CONTROL DE CAPITALES

**El huevo de la serpiente de la
crisis macrista**

INDICE

DESCONTROL DE CAPITALES

EL HUEVO DE LA SERPIENTE DE LA CRISIS MACRISTA.

Por Emanuel Bouza.....2

GEPOLÍTICA DE LA TECNOLOGÍA DESDE LA SEMIPERIFERIA

Por Diego Hurtado.....10

EL BLOQUEO CONTRA QATAR Y LA RECONFIGURACIÓN

DE LAS ALIANZAS EN MEDIO ORIENTE

Por Mariela Cuadro.....23

LAS VÍAS NAVEGABLES EN LA PROYECCIÓN GEOPOLÍTICA

Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ARGENTINA:

UNA CHARLA CON HORACIO TETTAMANTI

Por Manuel Valenti Randi.....27

LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA HOY.

EJES PARA UNA INSERCIÓN INTERNACIONAL DESDE LA PERIFERIA

Por Juan Varela.....34

REFLEXIONES EN TORNO AL TLC MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA

Por Nicolás Canosa.....44

LA DOLARIZACIÓN DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS

Por Fernando Oviedo.....50

ARGENTINA EMERGENTE

Por Gustavo Andrés Di Pace.....56

EL ETERNO RETORNO AL PATIO TRASERO.

UN ANÁLISIS DE LA NUEVA POLÍTICA DE DEFENSA DEL MACRISMO.

Por Martín Calero.....61

DESCONTROL DE CAPITALAS. EL HUEVO DE LA SERPIENTE DE LA CRISIS MACRISTA



¿Contagio?

En 2017, 15 de los 53 países que componen la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sufrieron un gran brote de sarampión. Rumania, con 5.562 casos; Italia, con 5.006; y Ucrania, con 4.767 fueron los países más afectados. Aunque en un principio el origen de este fenómeno fue atribuido a casos de "sarampión importado", la mayoría de los analistas advirtió que esto último no sería capaz de diseminar el virus si en Europa hubiera una cobertura óptima. Las razones del brote debían buscarse en un liso y llano descenso de las tasas de vacunación, debido a factores como la interrupción en los suministros o el auge del movimiento antivacunas.

En la Argentina contemporánea, por el contrario, el oficialismo parece rehuir a cualquier tipo de autocrítica respecto al actual estado de *pre-default* en el que se encuentra la economía, y en cambio busca refugio en parábolas climáticas o en “crisis importadas” de otras latitudes. El más reciente chivo expiatorio, aunque seguramente no el último, fue la brutal devaluación de la lira turca. Con un equipo económico que se apresta a viajar por enésima vez a Washington a implorar dólares y recibir los retos de Christine Lagarde, quizá sería piadoso concederles que efectivamente hay algo que vincula a las economías de Argentina y Turquía. Pero es más complejo que un contagio. Es casi un viaje a través del espejo.

Comencemos por señalar que las crisis no son una novedad para ninguno de los dos países. En el caso turco, la registrada en febrero de 2001 marcó el comienzo de la mayor depresión económica doméstica desde la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en este momento asumió el poder Recep Tayyip Erdogan, y a comienzos de 2002 firmó un Acuerdo *Stand By* con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 16 mil millones de

dólares. Tras este acuerdo, Turquía no sólo se convirtió en el primer deudor del mundo del FMI en relación a su cuota (años después le arrebatáramos ese título), sino que dio comienzo a un programa de privatización del sector público, reformas laborales y drásticos recortes sociales. Las políticas de austeridad tuvieron un correlato financiero fundamental: la fijación de altas tasas de interés para contener la inflación y la liberalización del ingreso y egreso de capitales. Esto último condujo a una importante afluencia de inversiones de corto plazo, también denominadas *capitales golondrina*, *inversiones de cartera o portafolio*, cuyo objetivo no es incidir sobre la capacidad productiva de un país sino hacerse de un determinado activo monetario para valorizarlo y obtener un rendimiento financiero.

Tras las crisis de las *subprime* de 2007-08, y como resultado de un conjunto de medidas de expansión monetaria adoptadas por la Reserva Federal—fundamentalmente la fijación de una tasa de interés de casi cero durante siete años—, billones de dólares bajo la modalidad de inversiones de cartera se volcaron sobre las economías

emergentes, atraídas por el ingreso desregulado y el enorme diferencial positivo de tasas de interés o *carry trade* que ofrecían países como Turquía y, desde 2016, Argentina. Justamente, en el año 2017, la economía turca vio cuadruplicarse el monto de capitales de corto plazo recibidos, de 6,3 mil millones de dólares a 24,3 mil millones. Bancos e inversores extranjeros usaron este dinero para invertir masivamente en valores del sector público denominados en liras, que aumentaron de \$ 3,5 mil millones en 2016 a \$ 13,1 mil millones en 2017. Cualquier similitud con la billonaria burbuja de Lebac no es mera coincidencia.

Ahora bien, las inversiones de cartera son por naturaleza *procíclicas*: vienen en las bonanzas y huyen en las crisis. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para neutralizar o al menos amortiguar sus efectos sobre la estabilidad financiera? En primer lugar, no empezar a intervenir con una crisis cambiaria ya instalada. Es crucial administrar bien los ingresos de capital en tiempos de alta liquidez internacional: emplear herramientas fiscales y regulatorias para favorecer la inversión directa o en acciones por sobre la compra de títulos

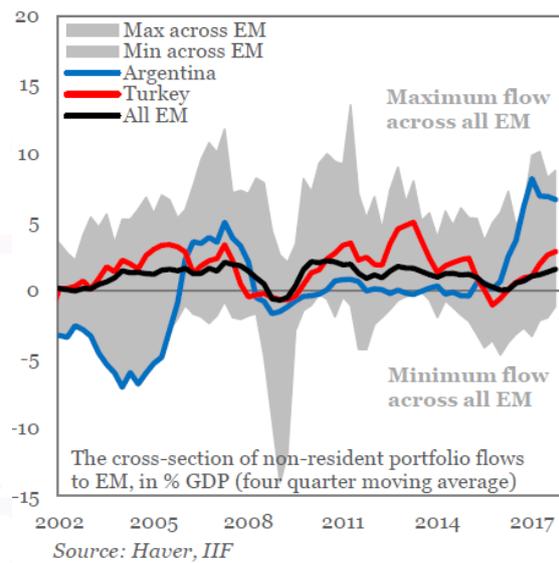
de corto plazo; establecer controles de capital por adelantado para frenar los flujos de salida en un contexto de volatilidad; y hasta fijar políticas para canalizar fondos extranjeros a inversiones productivas. Estas recomendaciones no fueron extraídas de un discurso de Axel Kicillof, sino de un editorial del [Financial Times](#) del pasado 19 de julio.

Efectivamente, la mayoría de los países emergentes, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, India y Tailandia, instrumentan desde hace varios años diversos mecanismos de control de capitales. Entre 2011 y 2015, Argentina hizo lo propio y dispuso un conjunto de regulaciones sobre los flujos de divisas, focalizadas en el uso y destino de la moneda extranjera que adquiría el sector privado para fines no productivos. Sin embargo, desde diciembre de 2015, al igual que en Turquía, se eliminaron todas las regulaciones cambiarias y los controles de capitales. Incluso se eliminó el plazo máximo de liquidación de divisas que regía desde 2001 y el requerimiento de encaje mínimo no remunerado para los flujos de inversión en cartera desde el exterior que regía desde 2005.

La liberalización de la cuenta capital fue el huevo de la serpiente de la crisis financiera actual. La Argentina, en relación con el resto de los mercados emergentes, recibió fuertes entradas de capital de corto plazo, lo cual la colocó en una situación de extrema vulnerabilidad financiera.

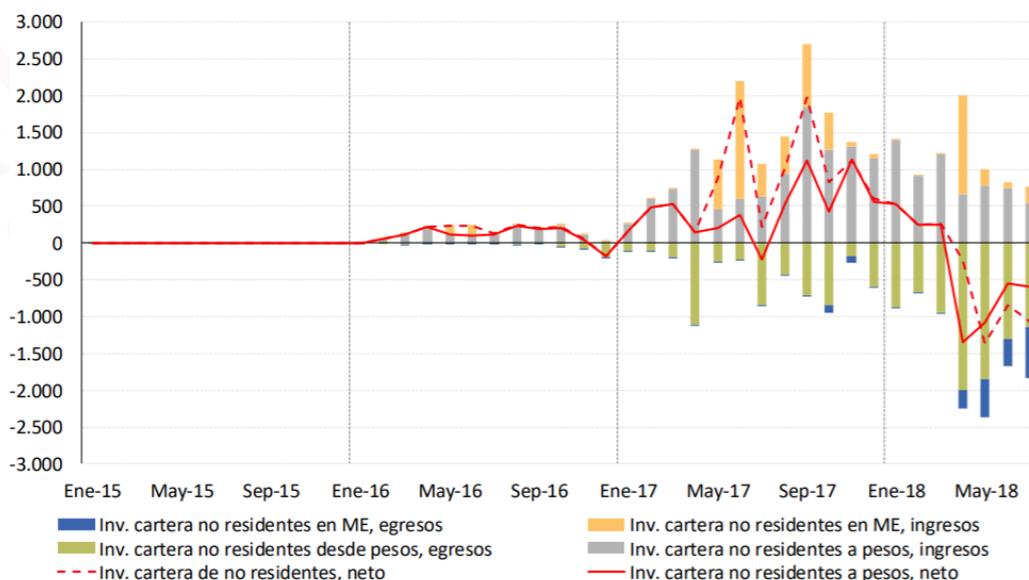
Las inversiones de cartera treparon un 545% en 2017 en comparación con el año anterior. Hablamos de unos 10 mil millones de dólares que ingresaron exclusivamente para la adquisición de acciones, bonos y Lebacs [3]. Con una tasa de interés por las nubes, los inversores extranjeros llegaron a alzarse con ganancias de hasta un 2% en dólares por mes, resultado que en Estados Unidos solo sería posible al

Inversiones de cartera 2002-2017



cabo de un año. Este excedente capturado vía valorización financiera claramente no surgió de la expansión económica o de un aumento de la productividad, sino de una transferencia neta de ingresos desde el salario y la inversión pública al capital especulativo.

Inversiones de no residentes. Cartera

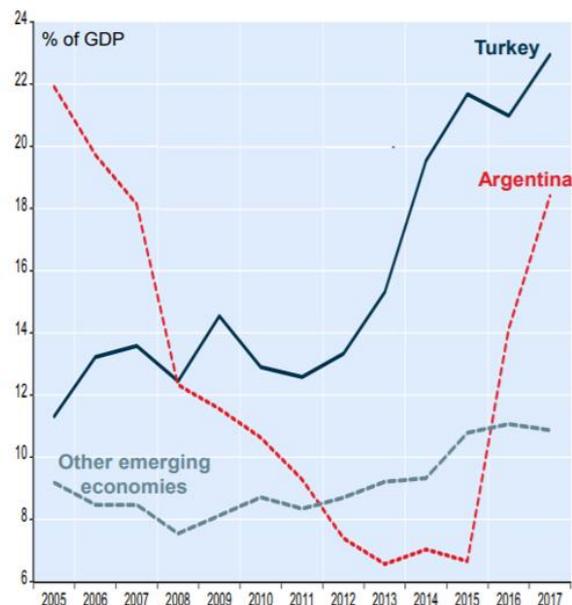


Fuente: BCRA

Como permite apreciar el gráfico, la contracción del ingreso récord de inversiones de cartera fue una sostenida y creciente fuga de capitales. De acuerdo con la medición de Formación de Activos Externos (FAE) del Banco Central, en lo que va de la era Macri el total fugado ascendió a más de 52 mil millones de dólares. Huelga aclarar que, en un contexto de apertura importadora indiscriminada y

déficit comercial récord, **los dólares que financiaron y siguen financiando esa fuga no provienen de los recursos excedentes de exportaciones sino del endeudamiento externo.** Entre diciembre de 2015 y septiembre del año pasado, el stock de deuda externa se incrementó 57%, de 63.600 millones de dólares a 111.000 millones, que equivale a un 19,9% del PBI. En este particular, la comparación con Turquía habla por sí misma.

Participación de la deuda externa en el PBI



NBF Economics and Strategy (data via Bank of International Settlements, IMF)

El juego de la silla

En el mundo de las finanzas suele decirse que es importante aprovechar las épocas de bonanza, pero más importante aún es advertir cuándo la música se apaga. Después de casi una década de alta liquidez y tasas en cero, en 2017 la música se apagó. La Reserva Federal decidió elevar los tipos de interés hasta llevarlos en junio de este año de 1,75 a 2%. Esto generó y/o profundizó notablemente los desequilibrios macroeconómicos que arrastran las economías emergentes. El desarme de posiciones y la apresurada salida de inversiones de cartera de estos países en busca de mayor rentabilidad en activos denominados en dólares (lo que suele llamarse *vuelo a la calidad* o *flight to quality*), desestabilizó sus divisas y agudizó sus déficits de cuenta corriente. Pero no todos los jugadores se quedaron sin silla. Las monedas que más perdieron frente al dólar en este 2018 fueron las de aquellas economías más expuestas en términos de endeudamiento externo y dependencia de capitales de corto plazo: la lira turca, con una baja del 40,6% y el peso argentino, con una devaluación del 35,8%.

Esto último demuestra, entre otras cosas, que la crisis financiera iniciada en 2007-08 no terminó, y que los problemas planteados por el cese abrupto de la burbuja inmobiliaria estadounidense y su extensión a otros mercados financieros no se han solucionado. Por el contrario, en lugar de una reforma genuina al sector financiero, el gobierno de los Estados Unidos mantuvo por largos años su tasa de interés cerca de cero e inundó las plazas del mundo con dólares “baratos”, creando en consecuencia una nueva burbuja, pero en este caso apalancada por los altos niveles de deuda contraída por las economías emergentes.

A través del espejo

Como se ha intentado describir, el principal problema macroeconómico vinculado a los mercados financieros integrados no deviene de una cuestión de “confianza”, sino de la desregulada movilidad de capitales de exagerado criterio cortoplacista, que limita la autonomía de los gobiernos a la hora de establecer pautas para administrar la producción, el empleo y la inflación.

La liberalización financiera expone a los países a vicisitudes asociadas con los cambios económicos que tienen lugar en el exterior, de manera que esas economías quedan a merced de las modificaciones repentinas en las percepciones de los prestamistas y de los inversores.

Del mismo modo, otro mito a desterrar es aquel que sostiene que el mercado cambiario responde a un juego de equilibrio entre oferta y demanda de dólares. El mercado de divisas es ante todo un ámbito de disputa por la valorización, la apropiación y la transferencia del excedente producido domésticamente. Tras la desregulación cambiaria y la liberalización de la cuenta capital implementadas por Cambiemos en 2016, un conjunto de grandes empresas e inversores locales y extranjeros, que anteriormente no podían acceder al mercado único de cambios para remitir utilidades al exterior, pudieron hacerlo sin restricción alguna. Cada dólar fugado, en ausencia de superávit comercial, fue facilitado por un nivel de endeudamiento externo inédito por su cuantía y velocidad. Hoy somos testigos de las consecuencias.

En un trabajo de reciente publicación, *“Neoliberalismo democrático: una nueva forma de poder”*, Emilia Castorina ofrece una caracterización que adquiere plena vigencia en el contexto de la actual crisis financiera y que nos permitimos transcribir: *“El neoliberalismo se caracteriza por generar crisis financieras recurrentes, las cuales no son ni una anomalía ni el preanuncio de su fin, sino un aspecto clave de su mecanismo de disciplinamiento. La valorización financiera se reproduce a través de las crisis en la medida en que estas no solo representan oportunidades únicas para socializar los riesgos, sino también para reestructurar las políticas económicas y reorganizar las relaciones sociales a fin de profundizar aún más la concentración y la internacionalización de la producción. No es un dato menor que dos tercios de los miembros del FMI hayan experimentado crisis financieras después de 1980, habilitando así los famosos “rescates financieros” del FMI, que no son más que planes de ajuste para distribuir los costos de las crisis hacia los sectores de menos ingresos (...) De esta manera, las crisis financieras, y en general la inestabilidad o inseguridad económica,*

han sido funcionales al disciplinamiento social en la medida en que los países periféricos y las clases trabajadoras son sistemáticamente responsabilizadas por las causas de las crisis, ya sea por el excesivo gasto social, los altos salarios o el exceso de demandas sociales sobre el Estado.” [4]

Y como a veces las historias terminan dónde empiezan, desde esta columna deseamos condenar la reciente decisión del (ex) Ministerio de Salud de suspender la aplicación de vacunas antimeningocócica a los niños y niñas de 11. Sobre esta decisión arbitraria y deshumanizada, al igual que sobre el latrocinio financiero descrito anteriormente, también deberán responder en un futuro no muy lejano las actuales autoridades.

Notas

[1] *Turkey and the Long Decade with The IMF: 1998-2008*. Available from: https://www.researchgate.net/publication/228594231_Turkey_and_the_Long_Decade_with_The_IMF_1998-2008 [accessed Sep 02 2018].

[2] <https://www.alternet.org/world/could-turkey-trigger-next-global-financial-crisis>

[3] <https://www.cronista.com/finanzasmercados/Con-us-10.000-millones-la-entrada-de-flujos-de-cartera-fue-record-en-2017-20180122-0023.html>

[4] Castorina, Emilia. “Neoliberalismo democrático: una nueva forma de poder”. *Question. Revista Especializada en Periodismo y Comunicación*. Vol. 1, Nº 53 (enero-marzo 2017). 20. Neoliberalismo democrático: una nueva forma de poder. Democratic neoliberalism: a new form of power.

ARTÍCULO

Por Diego Hurtado

GEOPOLÍTICA DE LA TECNOLOGÍA DESDE LA SEMIPERIFERIA



Argentina es un país periférico, pero con algunas capacidades industriales y tecnológicas. Este perfil de país la ubica –a semejanza de Brasil, Sudáfrica, o Turquía– en la semiperiferia, “franja” intermedia en la rígida jerarquía que determina la división internacional del trabajo a través de mecanismos coordinados por los organismos de gobernanza global y las economías centrales.

Desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico, un corolario de esta perspectiva es que son justamente los países de la semiperiferia los que se presentan como “mercados” de tecnología codiciados por los países avanzados, ya sea a través de inversión extranjera directa – compra de paquetes accionarios de empresas locales, instalación de subsidiarias, etc. –, ventas “llave en mano”, pago de regalías, asistencia técnica o, de forma creciente, como espacio receptor de la deslocalización de aquellos segmentos de las cadenas de valor global que necesitan mano de obra entrenada y disciplinada para la sobreexplotación.

Sin embargo, en tensión con estas ambiciones, cuando las economías semiperiféricas logran plasmar proyectos de desarrollo, la senda obligada es primero dominar y más tarde exportar tecnologías de creciente grado de complejidad a otros países de la periferia como modo, no solo de evitar el deslizamiento hacia la periferia, sino también de mejorar su influencia y su estatus en el subsistema regional. Y si la estabilidad política y económica pudiera soportar los embates de las “reglas de juego” globales –siempre concebidas para obstaculizar este ascenso–, la senda de aprendizaje y escalamiento de capacidades apunta a competir y vender tecnología en los mercados globales de retorno creciente, que son de estructura oligopólica.

En su intento por “organizarse” para avanzar en el desarrollo de tecnologías que le posibiliten el acceso a mercados que están en el foco de interés de los países centrales –energías nuclear y renovable, aeronáutica, TICs, telecomunicaciones, medicamentos, por ejemplo–, los países semiperiféricos suelen ser objeto de estrategias –formales e informales– de

obstaculización o bloqueo. Poner en riesgo los intereses comerciales de los países centrales suele ser conceptualizado por la “lógica” hegemónica como una alteración del “equilibrio” y, por lo tanto, de la “estabilidad”, es decir, del balance de poder del sistema mundial.

Desde el punto de vista de las capacidades organizacionales, una manera de “medir” el grado de desarrollo de una economía es analizando la complejidad de los productos y servicios que es capaz de producir y de exportar. En este sentido, como economía semiperiférica, Argentina fue capaz de configurar –a través de trayectorias sinuosas y con numerosos claroscuros– unos pocos *entornos organizacionales con rasgos sistémicos* entendidos como tramas institucional-empresariales –empresas públicas, mixtas y privadas– con capacidad de coordinación para generar procesos colectivos de aprendizaje y escalamiento tecnológico con el objetivo de desarrollar tecnologías de creciente complejidad.

En otros momentos de su historia, por ejemplo, Argentina se propuso impulsar *entornos organizacionales* que

alcanzaron *diversos grados de densidad sistémica* en sectores como aeronáutica, naval, metalmecánica, hidrocarburos, automotriz y electrónica, por ejemplo, pero fueron destruidos sin poder alcanzar niveles de densidad aptos para sobrevivir a las inestabilidades generadas por las “reglas de juego” del rígido ajedrez global. Los sectores nuclear, satelital y de producción pública de medicamentos figuran hoy entre los más visibles que se intentan hoy desmantelar. El entorno de aprendizaje y escalamiento nuclear-satelital –en camino a transformarse en lo que las economías centrales llaman hoy ecosistemas de innovación–, luego de varias décadas demostró que podía ser “competitivo” en segmentos estrechos de los mercados oligopólicos dominados por un grupo de países avanzados.

Es por esta razón que el supuesto “péndulo argentino” –imagen equívoca, porque no se trata de una oscilación simétrica–, cuando se mueve desde el extremo democracia-industrialización-distribución hacia el extremo opuesto autoritarismo-primarización-concentración, el primer

efecto del disciplinamiento hegemónico ejercido por la tríada Embajada-grupos concentrados (patria contratista y sector agroexportador)-poder financiero internacional, en su esfuerzo por periferizar la semiperiferia argentina, es inexorablemente el desmantelamiento de entornos institucionales-empresariales que habían logrado rasgos organizacionales más o menos sistémicos [1]. Porque es en estas estructuras donde co-evolucionan la acumulación de conocimientos con la elaboración de estilos, ideas, valores, componentes ideológicos y modos de acción. Este conglomerado de rasgos idiosincráticos –muchos tácitos e intangibles– a partir de los cuales un país inventa sus modos de organización y sus perfiles institucionales y empresariales son los “códigos para el desarrollo” que hay que poder reproducir, amplificar y diversificar en otros sectores. “Si tuviéramos quince o veinte INVAPs este país sería diferente”, reza el imaginario de una Argentina utópica. Sin embargo, Argentina hoy no fabrica automóviles, aviones, computadoras, vacunas o electrónica de consumo con capacidad de exportación.

Geopolítica de los satélites

Cuando el macrismo se hizo cargo del gobierno, en diciembre de 2015, podía entenderse que pensara diferente al gobierno anterior en temas de política de comunicaciones satelitales y que, por lo tanto, se propusiera reorientar la gestión de la empresa pública ArSat. Sin embargo, era incomprensible que un país que había logrado producir sus dos satélites geoestacionarios en menos de una década y gestionar su puesta en órbita, contratara a la consultora estadounidense McKinsey para que le explicara cuál debía ser el “plan de negocios” de ArSat. En julio de 2016, nos enteramos que, además de cobrar 12,5 millones de pesos por algunas semanas de trabajo, McKinsey parece que le recomendó al gobierno argentino qué hacer con ArSat 3 y con el negocio codiciado de la banda ancha.

A pesar del intento del macrismo de avanzar en secreto, la filtración de una carta de intención entre ArSat y Hughes puso en evidencia que el “negocio” macrista se proponía crear una nueva empresa con mayoría accionaria a favor de la empresa norteamericana. En un nivel técnico y jurídico, la consecuencia

inmediata era que Hughes se quedaba con el negocio de banda ancha a través del uso de una posición orbital asignada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) –organismo de Naciones Unidas– a la Argentina. Como bien saben los gobiernos neoliberales de las economías desarrolladas, las posiciones orbitales son consideradas extensión de la soberanía territorial al espacio exterior. Dado que la carta de intención entre ArSat y Hughes asumía que el ArSat 3 se ubicaría en una posición orbital argentina, es inevitable concluir que el acuerdo que no prosperó se proponía ceder parte de este patrimonio público argentino a una empresa norteamericana. Es decir, el acuerdo secreto suponía cambio de disponibilidad de la posición orbital [2]. Por ese motivo, el “plan” satelital de Cambiemos violaba el artículo 10 de la ley 27.208 de promoción de la industria satelital sancionada por el Congreso a fines de 2015.

En un nivel estratégico de mediano y largo plazo –variable crucial en la concepción de políticas tecnológicas– el inefable Macri sostuvo por esos días que, a través de esta carta de

intención, se estaba “buscando un socio estratégico”. Paradojas del neoliberalismo semiperiférico o dependiente, un socio estratégico para un sector declarado por ley de interés nacional y política de Estado no puede ser una empresa norteamericana, socio totalmente inconveniente para un sector como las telecomunicaciones satelitales, que es considerado estratégico por todas las economías (neoliberales) de países centrales debido a su alto contenido de I+D, los efectos de difusión de conocimiento técnico y su relevancia en el comercio internacional. A esto debe agregarse que estos sectores de alto valor agregado son de competencia imperfecta y presentan, dentro de los países, estructuras monopólicas y oligopólicas. Es decir, las comunicaciones satelitales en manos del macrismo se transforman en ejemplo paradigmático de lo que se presenta como desregulación –que en los hechos es una franca desinstitucionalización– de un sector estratégico, rasgo central de lo que llamamos neoliberalismo semiperiférico que acompaña la máxima del economista surcoreano Ha-Joon Chang: “keynesianismo para ricos,

monetarismo para pobres” [3]. Por eso, mientras el macrismo “abre los cielos” –“desregula” el sector– los gobiernos (neoliberales) de los países centrales asumen que deben intervenir, apoyar y proteger este tipo de industrias.

En el momento en que el *affaire* secreto ArSat-Hughes se filtró hacia la esfera pública y se transformó en un pequeño escándalo, los cálculos de costo político llevaron al macrismo a balbucear que la empresa de tecnología INVAP conservaría la construcción del Arsat 3. Frente a recortes, despidos y desmantelamientos de proyectos tecnológicos en curso, para la comunidad de ciencia y tecnología era un alivio –algo como un premio consuelo– que el macrismo creyera que se podía romper todo, pero que iba a cuidar a INVAP. Sin embargo, la versión es hoy desmentida por los hechos: el ArSat 3, que debía ponerse en órbita en 2018, no existe y Argentina, en franco proceso de periferización, hoy está desaprendiendo a fabricar satélites geoestacionarios.

A pesar de los reiterados éxitos sin precedentes que significaron para INVAP la fabricación de ArSat 1 y 2 y

que, en enero de 2018, la misma empresa fuera seleccionada por el gobierno de Holanda para construir un reactor nuclear para la producción de radioisótopos en la ciudad de Petten, a 50 kilómetros de Amsterdam, a fines de junio, el macrismo le recortó a INVAP 700 millones de dólares de contratos con el sector público, conservando contratos por solo 300 millones de dólares.

Como explica una nota de la Agencia TSS: “Son tres los proyectos cancelados definitivamente y en todos ellos INVAP era el contratista principal de una dependencia específica del Estado con el objetivo de favorecer el desarrollo tecnológico”: el SARE –el sistema de satélites livianos de arquitectura segmentada–; el ArSat 3; y el Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), en estado avanzado, que se proponía desarrollar drones voladores de mediana y gran envergadura (3).

Para hacernos una idea del factor geopolítico en juego en el sector satelital, recordemos que en 2006, mientras se avanzaba en la contratación del diseño y construcción del primer satélite geoestacionario, a fines de junio la Embajada de EEUU en

Buenos Aires enviaba a varios organismos de su gobierno con información considerada “sensitiva”. El texto daba los fundamentos de su apoyo a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 50 millones de dólares a la CONAE para la construcción y lanzamiento de un satélite de teledetección –el SAC-D– en la banda L. El informe se oponía a algunas objeciones de otros actores del gobierno de EEUU que sostenían que se trataba de un “classic trophy project”, que los satélites no eran una política prioritaria para la Argentina y que “el BID debería enfocarse en el alivio de la pobreza y el cambio de régimen político” (4).

La embajada en Buenos Aires apoyaba la concesión del crédito por considerarlo de interés nacional para EEUU: “Este préstamo ayudaría a desarrollar una de las pocas áreas tecnológicas donde Argentina es globalmente competitiva y también una en la cual el gobierno de EEUU y las empresas norteamericanas estaban trabajando en cooperación con Argentina”. El mismo documento agregaba: “El ejército de EEUU tiene intereses directos en la tecnología que

resultaría de este proyecto en el futuro". Si bien había algunas reservas respecto al pedido de excepción de las reglas de contratación del BID, "esto puede tener menos relevancia en el contexto argentino, donde existe una sola empresa que puede hacer este tipo de trabajo, una que abastece el 90% de sus adquisiciones de EEUU". Esta empresa era INVAP, que sería casi seguramente la ganadora del contrato y cuya línea de suministros era "muy dependiente de la tecnología de EEUU, lo que no solo significa que las empresas de EEUU recibirán una gran parte de los recursos del préstamo, sino también que se aplicarán las restricciones tecnológicas de EEUU" [4]

Es decir, mientras que el préstamo sería para la CONAE, esta agencia lo utilizaría para contratar empresas. Lo novedoso era que Argentina produciría el satélite, lo que se ajustaba a los objetivos de "aumentar la competitividad nacional" y "reconstruir el capital humano", que establecía el BID para Argentina. También se comentaba en este documento que "las capacidades en tecnología satelital de Argentina no llegan a la construcción de satélites de telecomunicaciones",

según los contactos con el sector privado de EEUU, que informaban a la Embajada que "INVAP no tiene todavía la capacidad técnica necesaria para competir a nivel mundial". Finalmente, el US Army International Technology Center South America (USAITC-SA) estaba instalado en Argentina "para identificar la tecnología argentina que podría ser útil para EEUU en aplicaciones en defensa, incluyendo a INVAP [...]. Dos entidades militares de EEUU están interesadas en la tecnología satelital de INVAP para Sistemas de Combate Futuros" [5]

A la fecha de cierre de este texto, todo parece indicar que el ArSat 3 no será recomenzado por el macrismo y su política de comunicaciones satelitales de "cielos abiertos" no hizo otra cosa que facilitar un acelerado proceso de financierización del sector a través del ingreso de más de veinte satélites extranjeros.

Geopolítica de la energía eólica

Desde que, en 2005, se lanzó el Plan Estratégico Nacional Eólico y, al año siguiente, el Congreso sancionaba la ley que definía el "Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes

Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” – reglamentada recién en mayo de 2009–, la trayectoria del sector eólico fue sinuosa y complicada. Entre otras metas, la ley establecía que en 2016 se debía a alcanzar el 8% de participación de energías renovables en el consumo total de electricidad a escala nacional. Si bien hubo continuidad en la política económica entre el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos períodos presidenciales de Cristina Fernández (2007-2015) y se mantuvieron deprimidos los precios de los servicios públicos, en especial de los servicios de energía, el crecimiento de la economía generó una importante presión sobre la demanda energética.

Un ingeniero de la empresa INVAP Ingeniería explicaba, en abril de 2009, la situación Argentina: “Estamos frente a una paradoja: los precios artificialmente bajos de la electricidad impiden un brote de la industria eólica argentina, pero al mismo tiempo frenan el desembarco en el país de fabricantes extranjeros”. El mercado eléctrico nacional pagaba muy poco el megavatio-hora y hacía poco atractiva la opción eólica para los inversores

privados, a la vez que los incentivos nacionales y provinciales no alcanzaban para revertir este escenario. Ahora bien, el aumento de los precios internacionales del petróleo y el gas, recursos que se tornaban escasos para el país, había comenzado a hacer subir el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Esta combinación era interpretada como una ventana de oportunidad “para que algunas firmas argentinas asuman el riesgo de volverse competidoras mundiales en este mercado inmenso” [6]

En parte para responder a este escenario, la empresa ENARSA lanzó, en mayo de 2009, la licitación pública nacional e internacional a través de su programa Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (GENREN). Al año siguiente se conformó el Clúster Eólico Argentino (CEA), que reunía a 65 empresas de once provincias, que se incorporaron a la cadena productiva de la energía eólica. En ese momento, la Argentina era el único país de la región con tecnología eólica propia y ya contaba con dos empresas –IMPSA Wind y NRG Patagonia– con aerogeneradores homologados y certificados entregando energía a la red

y una tercera empresa estatal, otra vez INVAP, que se encontraba desarrollando tecnología de aerogeneradores de baja potencia. Sin embargo, a pesar de las intenciones formales del Programa GENREN, las primeras iniciativas que comenzaban a concretarse mostraban serias deficiencias en la aplicación del régimen de “compre nacional”.

A fines de 2014, el aporte de energías renovables a la producción de electricidad no superaba el uno por ciento. Otra vez las condiciones de contorno antes que los instrumentos específicos o las barreras de entrada explicaban las limitaciones en el cumplimiento del GENREN. El Congreso argentino aprobó, en diciembre de 2015, la ley 27.191 de promoción de las energías renovables, que impulsaba un nuevo régimen de inversiones que giraba en torno a la conformación de un fondo fiduciario público (FODER) para respaldar el financiamiento de proyectos de inversión. Como explica el director de OETEC, Federico Bernal: “El ritmo de incorporación de eólica y solar a la matriz energética impuesto por el kirchnerismo pudo haber sido bajo, pero así y todo incluyendo sus

limitaciones permitió el crecimiento de la industria nacional en el sector” [7]. Este ciclo se clausuró con la llegada del macrismo al gobierno. A partir de entonces, Argentina se alinea al proceso de financierización del “mercado” de las energías renovables, abandona a su suerte a las empresas nacionales e inicia un proceso de compra masiva de tecnología extranjera llave en mano. Pongamos en contexto el inicio de este proceso de desmantelamiento de capacidades nacionales.

Con el colapso global de 2008, el cambio climático ganó impulso como catalizador de grandes negocios y las energías renovables se transformaron en la nueva panacea tecnológica: no solo podrían evitar la catástrofe ambiental sino también sacar al capitalismo global de la perdurable anemia postcrisis. La reconversión de la matriz energética mundial desde los hidrocarburos hacia las energías renovables “requerirá una transformación estructural casi completa de los sistemas de energía, transporte, uso de la tierra e industriales”, explicaba un grupo de

economistas neoschumpeterianos de alta visibilidad [8].

A modo de ejemplo, este enfoque sostiene que este proceso de “destrucción creativa” impulsará “un período dinámico y prolongado de innovación, oportunidad, empleo y crecimiento económico”. Oportunidad, empleo y crecimiento económico ¿para quién? La respuesta es algo como:

“Los países en desarrollo requerirán la cooperación global para lograr acciones en esta escala; es poco probable que puedan o deseen lograr estas reducciones ambiciosas sin una acción sustancial correspondiente en los países desarrollados y sin asistencia para pasar a una senda de crecimiento con bajas emisiones de carbono, incluida la transferencia de tecnología y apoyo financiero” [9]

Si recordamos que en el diccionario neoliberal de las relaciones internacionales “cooperación” significa “negocios”, “asistencia” significa “crédito” y “transferencia” significa “venta de tecnología”, el plan de la “revolución verde” es endeudar a las periferias para que compren a escala masiva tecnologías renovables a las

economías centrales. Es decir, la “revolución industrial verde” abre un horizonte inédito para los grandes negocios tecnológico-financieros en las periferias.

El gobierno de Macri vino a cumplir estos deseos. Una semana después de la visita de Obama a la Argentina, el 23 de marzo de 2016, el macrismo sancionó el decreto de reglamentación de la nueva ley de promoción de las energías renovables –decreto 531 del Ministerio de Energía y Minería– y a mediados de mayo lanzó el programa RenovAr. A contramano de la ventana de oportunidad que se presenta para un país como Argentina, que tiene empresas con capacidades en tecnología eólica únicas en la región, la versión macrista de la “revolución verde” es el programa RenovAr, que transforma una política tecnológica e industrial en un fastuoso negocio financiero –incluida la intermediación local como “incentivo”–, a través de la compra masiva de tecnología importada llave en mano.

Al ver los pliegos de licitación, las empresas nacionales descubrieron, con indignación, que quedaban relegadas a componentes marginales. De esta

forma, se clausuraron trayectorias de “compra inteligente del Estado”, el incentivo al eslabonamiento de empresas locales, las alianzas público-privadas y muchos otros recursos de políticas tecnológicas que eran el producto de un costoso proceso de aprendizaje social y que es el intangible más valioso que supone la noción de “sociedad del conocimiento”.

Epílogo

Este complejo panorama de desmantelamiento de sectores estratégicos, que impulsa la ideología que hemos llamado neoliberalismo semiperiférico o dependiente, se enfoca en la destrucción de los procesos de conformación de entornos institucional-empresariales de crecientes capacidades organizacionales y densidad sistémica, dentro de los cuales venían consolidándose algunos componentes cruciales para un cambio estructural: por un lado, culturas empresariales productivistas alternativas a las culturas especulativas y predatorias de las fracciones concentradas; y, por otro lado, culturas científico-tecnológicas de creciente compromiso con la realidad socioeconómica del país, con

protagonismo de las ciencias sociales y las ingenierías. Este proceso de desmantelamiento va acompañado por la degradación de las capacidades de política y gestión tecnológica del Estado, donde la noción de “desregulación” en los hechos se manifiesta como francos procesos de desinstitucionalización.

Es decir, el neoliberalismo dependiente encarnado por el macrismo –o el temerismo en Brasil– es la máquina que hoy supieron diseñar las economías centrales –a través de la “tríada mediática, judicial y de servicios de inteligencia” [10] para atacar desde adentro los mecanismos de producción de desarrollo y equidad. Como explica Piketty: “El proceso de difusión de los conocimientos y las competencias es el mecanismo central que permite al mismo tiempo el aumento general de la productividad y la reducción de las desigualdades, tanto en el seno de los países como entre ellos” [11].

Como complemento de este proceso de periferización, el ataque a los gremios y la devaluación de la moneda va generando las condiciones para que Argentina pase a ser un país receptor de la deslocalización de segmentos de

bajo valor agregado de las cadenas de valor global, capaz de aportar mano de obra disciplinada para la sobreexplotación con bajos salarios. El punto de llegada no sería, como sostiene el macrismo, algo parecido a Australia –meta absurda–, sino una economía primarizada y extranjerizada, capaz de albergar ensambladoras que bajen los costos de producción de las empresas transnacionales.

De esta forma, la estructura del capitalismo global, amenazada por el ascenso disruptivo de China, intenta consolidar una segmentación que polariza el sistema global: por un lado, las economías centrales se reservan la exportación de alto valor agregado en sectores líderes, a través de I+D, diseño e innovación, y del control de los nodos estratégicos de las cadenas de valor global; por otro lado, las periferias quedan relegadas a competir, a través de ventajas comparativas estáticas – recursos naturales– y bajos salarios en condiciones de sobreexplotación, por la inversión extranjera directa y la recepción de ensambladoras. La creciente financierización global y los ataques especulativos a las economías más vulnerables son un subproducto

darwiniano de los procesos de periferización necesarios para continuar la espiral expansiva de la acumulación sin fin en un contexto de finitud material que va alcanzando sus límites estructurales (11).

Notas

[1]La síntesis iluminadora del péndulo puede verse en: Diamand, Marcelo. 1983. *El péndulo argentino: ¿hasta cuándo?* (folleto). Buenos Aires: Centro de Estudios de la Realidad Argentina.

[2]El artículo 10 de la ley 27.208 establece: “Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 ‘Argentina Digital’, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.”

[3]De la Vega, Carlos. 2018. “¿Por qué nos importa INVAP?”, *Agencia TSS*, 9 de agosto. En: <http://www.unsam.edu.ar/tss/por-que-nos-importa-invap/>

[4]Ver: http://wikileaks.org/plusd/cables/06BUENOSA1RES1442_a.html

[5]Brendstrup, Hugo. 2009. “¿Por qué todavía no tenemos grandes parques eólicos?”, abril.

En:<http://www.invap.com.ar/es/la-empresa/responsabilidad-social-empresaria/194-la-empresa/columna-de-opinion/432-ipor-que-todavia-no-tenemos-grandes-parques-eolicos.html>

[6]Bernal, Federico. 2016. “La ‘pesada herencia’ en renovables y la velocidad de diversificación de la matriz”, *OETEC*, 8 de noviembre. En: <http://oetec.org/nota.php?id=2172&area=1>

[7]Jacobs, Michael y Mariana Mazzucato. 2016. “Rethinking Capitalism: An Introduction”, pp. 1-27. En: M. Jacobs y M. Mazzucato *Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth*. Chichester, WSX: Wiley-Blackwell.

[8]Rydge, J. y S. Bassi. 2014. “Global Cooperation and Understanding to Accelerate Climate Action”, pp. 1-22. En: N. Stern, A. Bowen y J. Whalley (eds.), *The global development of policy regimes to combat climate change*. New Jersey: World Scientific Publishing.

[9]Asiain, Andrés. 2018. “Cuadernos de la corrupción”, Suplemento Cash, *Página/12*, 19 de agosto.

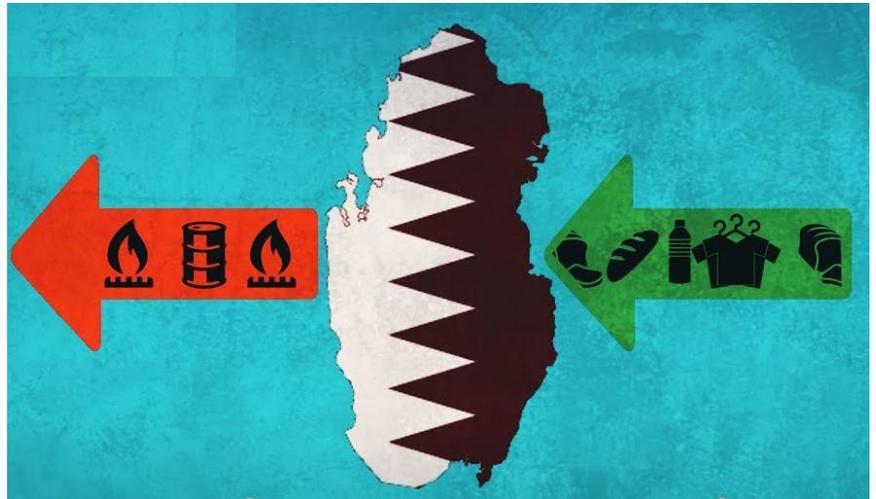
[10]Picketty, Thomas. 2018 [2013]. *El capital en el siglo XXI*. Buenos Aires: Paidós.

[11]Smith, John. 2016. *Imperialism in the Twenty-First Century. Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis*. Nueva York: Monthly Review Press.

ARTÍCULO

Por Mariela Cuadro

EL BLOQUEO CONTRA QATAR Y LA RECONFIGURACIÓN DE LAS ALIANZAS EN MEDIO ORIENTE



El 5 de junio de 2017, en un movimiento de impactante radicalidad, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahrein y Egipto retiraron sus respectivos embajadores de Qatar e impusieron un bloqueo terrestre y aéreo sobre el emirato. El argumento esbozado fue el supuesto apoyo de Qatar al “terrorismo” y su acercamiento al enemigo por antonomasia del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): Irán. Si bien el conflicto entre los socios es de larga data y puede remontarse al año 1995 cuando el padre del actual emir qatarí derrocó al suyo para quedarse con el trono, a partir de los levantamientos árabes comenzados en Túnez en diciembre de 2010, la relación de los países del Golfo se ha tensado hasta un punto de no retorno.

Desde la llegada del sheikh Hamad bin Khalifa al Thani al trono de Qatar, contradiciendo las recetas realistas, Doha ha buscado ser un actor de peso en la región de Medio Oriente. Sus principales armas: el gas natural licuado que le devuelve cuantiosas sumas de dinero, una política de ciudadanía muy restrictiva y la corporación mediática Al-Jazeera. Fue precisamente a través de esta última que, durante las elecciones que siguieron a los levantamientos árabes, Qatar apoyó a las distintas expresiones nacionales de los Hermanos Musulmanes. Ya que esta organización política es considerada enemiga de las monarquías tanto saudí como emiratí, el apoyo qatarí fue concebido como una declaración de guerra. En este contexto, y una vez que los Hermanos Musulmanes fueron derrocados mediante un golpe cívico-militar en Egipto, se explicitó el primer quiebre importante entre los vecinos.

Sin embargo, éste se recompuso con la llegada del nuevo rey saudí Salmán bin Abdulaziz. No obstante, sería una recomposición meramente estética puesto que el conflicto entre los socios del Golfo se replicaba en distintos

escenarios del mundo árabe, contribuyendo a la situación caótica que aún hoy pervive. Así, cada uno de los conflictos que aquejan a la región tiene como uno de sus factores el apoyo de estos países a distintas facciones enfrentadas: Siria, Yemen, Libia, Palestina, Egipto.

No habiéndose solucionado el conflicto de fondo -que requeriría que Qatar opte por abandonar su política autonómica respecto del CCG-, Doha comenzó a acercarse a Turquía con quien compartía, además, la misma agenda de apuesta al islamismo democrático como fuerza dominante en el nuevo mapa de Medio Oriente. De esta manera, en 2015 Qatar y Turquía establecieron el Comité Estratégico Supremo que supone reuniones frecuentes entre los mandatarios de ambos países. Entre los puntos a destacar de este Comité se encuentra la intensificación de los lazos militares entre ambos países. Ésta permitió la instalación de una base militar turca en suelo qatarí donde se desplegó material militar sólo unos días después de comenzado el conflicto. El cierre de esta base es uno de los 13 puntos que sus vecinos del Golfo le

exigen a Qatar como condición para reanudar relaciones.

La novedosa estratégica relación de Qatar con Turquía también implicó que Doha pudiera sortear el bloqueo al que sus vecinos lo confinaron. Efectivamente, el conflicto no sólo supuso un aislamiento político sino también uno territorial. Teniendo en cuenta que la única frontera por tierra que tiene Qatar es con Arabia Saudita y su consiguiente dependencia de las importaciones de alimentos desde este país, el bloqueo amenazó con causar desestabilización interna que podría ser utilizada por tribus qataríes descontentas con la distribución de cargos y funciones al interior del emirato. Si la escasez no ha sido hasta el momento un problema para Doha, esto ha sido gracias a los aviones con alimentos enviados por Ankara, incrementando de manera exponencial las exportaciones de Turquía a Qatar. No obstante, esto generó también un impacto en el precio de los alimentos que sufrieron una suba palpable. Para establecer una nueva ruta por tierra, Irán fue sumado al nuevo tándem de cooperación.

De esta manera, existe la posibilidad de una reconfiguración de las relaciones de alianzas en Medio Oriente que implicaría la ruptura del CCG y que armaría un nuevo frente en el que colaborarían Qatar, Turquía e Irán. Si bien las relaciones entre Doha y Ankara están en su mejor momento, la relación con Teherán es más incierta. A pesar de que Qatar e Irán tienen una historia de cooperación puesto que comparten el campo de gas South-North Pars Dome y se ha evidenciado un claro mejoramiento de las relaciones entre ambos países, una alianza requiere tiempo. Por otra parte, Irán ha sido declarado por la administración Trump como uno de sus enemigos, retirándose del acuerdo nuclear que el ex Presidente Barack Obama firmara en 2015 y anunciando la reimplantación de sanciones económicas contra el país persa. Al mismo tiempo, Estados Unidos tiene una muy importante base militar en Qatar perteneciente al Comando Central de dicho país que ha servido a la potencia norteamericana para llevar a cabo cada una de sus operaciones de intervención en la región desde la década del 90s del siglo pasado.

Esta base es tan importante para Estados Unidos como lo es para Qatar, puesto que es un fuerte reaseguro contra una posible intervención militar por parte de Arabia Saudita y EAU quienes están entrenando a sus fuerzas en Yemen. En este sentido, Turquía e Irán no generan el mismo efecto de seguridad en la familia Thani que la base estadounidense. Mientras ésta se mantenga, Qatar no debería preocuparse. Sin embargo, al abrir el plano, Turquía (también anfitrión de una base militar -en este caso de la OTAN-) aparece en un momento de

fuerte enfrentamiento político y comercial con Estados Unidos que ha derivado en problemas económicos para el país. Qatar ha decidido jugar a favor de su aliado, anunciando una inversión de 15 mil millones de dólares que, se espera, atenúe la debacle económica. Este movimiento no es menor puesto que indica una política afirmativa por parte de Doha que, al momento de tener que elegir entre Estados Unidos y Turquía, no ha dudado en colocarse junto a su “hermano”.

ENTREVISTA

Por Manuel Valenti
Randi

LAS VÍAS NAVEGABLES EN LA PROYECCIÓN GEOPOLÍTICA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ARGENTINA: UNA CHARLA CON HORACIO TETTAMANTI



*OCIPEX dialogó con **Horacio Tettamanti**, Ingeniero Naval y ex Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, sobre la importancia geopolítica de los puertos y vías navegables para el relacionamiento comercial con el mundo y el desarrollo de Argentina.*

Geopolítica y vías navegables

MVR: A lo largo de la historia argentina y mundial las vías navegables (ríos, mares y océanos) han sido fuente de importantes disputas. Desde el conflicto entre Roma y Cartago por el control del comercio en el Mediterráneo, hasta el actual enfrentamiento por el dominio del tráfico marítimo en el Mar del Sur de China entre China, Estados Unidos y los países del sudeste asiático, las rutas marítimas y las vías navegables han sido disputadas por las principales potencias. Pero, ¿cuál es importancia geopolítica y económica de las vías navegables de un país?

HT: Las vías navegables son constitutivas de la identidad productiva y económica de una nación. Sin ninguna duda deben tener un lugar privilegiado en la más alta política de conducción de cualquier proyecto nacional y popular que pretenda ser liberador. Se establecen y consolidan a consecuencia de las relaciones de fuerza y de la determinación soberana. A su vez, son el reflejo de la matriz de relacionamiento internacional que las naciones quieran o puedan establecer. Desde la primigenia ruta de la seda a la

actual *one belt one road* de los chinos, nos enseñan y explican que los flujos del comercio internacional están íntimamente relacionados con el orden global. En Estados Unidos las luchas por el dominio del Misisipi fueron constitutivas del desarrollo industrial y declararon su navegación como parte del interés nacional en su constitución. Las luchas por el control de los flujos comerciales y marítimos, tanto en el Río de la Plata, como en el Paraná moldearon nuestra identidad nacional y contrato social.

El bloqueo anglo-francés y la Guerra del Paraná (1845-1850), en la que se enfrentó el gobierno de Rosas a Francia y Gran Bretaña, con apoyo del sector Unitario, se dio por el intento de las potencias extranjeras de garantizarse la "libre navegación de los ríos". Juan Manuel de Rosas, se oponía férreamente a esta política ya que entendía que, al igual que los industrialistas estadounidenses, la navegación de los ríos interiores del país una parte fundamental de la soberanía de un Estado y no podían ingresar libremente buques extranjeros. Luego del derrocamiento de Rosas, se zanjó este conflicto político y se plasmó en la constitución de 1853 establecía en su artículo 26 que "La navegación de los ríos interiores de la Confederación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la Autoridad Nacional.

La relación entre modelo de país, el modo de inserción internacional, el comercio exterior y las infraestructuras estratégicas

MVR: Las redes de infraestructura son un elemento central para la integración del sistema económico y territorial de un país, ya que permiten la conectividad logística. Es decir, que de acuerdo con el modelo de país y de inserción internacional que un gobierno tenga, será necesario planificar la infraestructura estratégica necesaria para poder llevarlo a cabo. Durante la última década, por ejemplo, el incremento de las prestaciones de servicios portuarios y de vías navegables sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay llevaron a una expansión de la producción agrícola y su industrialización, y al crecimiento de la productividad” [1].

HT: Sin ninguna duda la logística estratégica debe ser el correlato infraestructural de un proyecto nacional soberano y de liberación. En este concepto, las vías navegables y el complejo marítimo integrado por la marina mercante, los puertos y la

industria naval constituyen junto al esquema ferroviario aéreo y carretero los vasos comunicantes de la capacidad de consumo y producción de una comunidad organizada. Estos activos deberían ser objeto de una visión geopolítica propia que interprete en forma sistémica las demandas de un proyecto económico y productivo al servicio del desarrollo y el empleo.

El desarrollo de la infraestructura nacional que las élites locales pergeñaron con posterioridad a la sanción de la constitución de 1853 fue a la vez consecuencia y agente dinamizador de la matriz de inserción económico-comercial dependiente basada en la exportación de materias primas. Esto configuró una disposición espacial de la infraestructura ferroviaria, portuaria y marítima concentrada en la pampa húmeda, que sólo buscaba garantizar el arribo de la producción primaria a Europa como la llegada de manufacturas desde estos países. Posteriormente, durante el siglo XX, Juan Domingo Perón buscó establecer un modelo de país autónomo basado en el desarrollo industrial y científico tecnológico. Esto obligó al gobierno a planificar y realizar cambios importantes en la infraestructura logística y energética del país para llevarlo adelante.

Principales cambios en la política de Mauricio Macri sobre las vías navegables y los puertos argentinos

MVR: En el año 2013 la presidenta Cristina Fernández firmó la resolución 1108/13, donde se establecía que: “Dentro del ámbito geográfico de los países que integran el Mercosur las cargas de exportación originadas en puertos argentinos, únicamente podrán ser transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puertos de los Estados Parte del Mercosur y sus Estados asociados que mantengan vigentes acuerdos de transporte marítimo de cargas con la República Argentina” [2]. Una de las primeras medidas del gobierno de Macri fue derogar este decreto.

HT: Derogar el decreto implicó resignar la soberanía portuaria argentina y continuar con la consolidación del concepto de internacionalización de nuestros ríos y mares y entrega de los resortes estratégicos de la logística a los conglomerados multinacionales. Esa disposición aseguraba la soberanía portuaria argentina y la determinación de sostener el cabotaje nacional y

regional para la flota mercante de bandera. Esta batería de medidas, pretendidamente desreguladoras, terminaron de afianzar la red de intereses de cuatro grandes corporaciones que monopolizan la logística de las exportaciones de mineral de hierro boliviano y las agrícolas del litoral argentino, de Paraguay y del sur de Brasil. Esto satisface la intención de las transnacionales de convertir a ambos ríos en vías internacionales de libre navegabilidad sin control soberano. Algunas de las corporaciones transnacionales que se favorecerán con esta medida serán Hamburg Sud y Maersk, entre otras.

La relevancia estratégica del puerto de aguas profundas de La Plata y el Canal de Magdalena

MVR: Por orden del presidente Mauricio Macri, la Cancillería aceptó utilizar nuevamente el canal de Punta Indio y el puerto de Montevideo de aguas profundas como el puerto de salida de todos los productos de la Cuenca del Plata[3]. Esto dejó obsoleto el Canal de Magdalena y el proyecto del puerto de aguas profundas de La Plata,

que iba a permitir comerciar todos nuestros productos a través de un canal y puertos nacionales, rompiendo paulatinamente con la dependencia de las compañías multinacionales de transporte marítimo asentadas en

Montevideo. Hoy en día, la única puerta de entrada y salida al océano de la Cuenca del Plata es el puerto de Montevideo.



En términos geopolíticos, el desarrollo de infraestructura portuaria y transporte para comerciar con el mundo brinda autonomía respecto a las corporaciones transnacionales. Cada vez que nuestro país impulsó un proceso de industrialización, se topó tempranamente con la limitación estructural de la restricción externa, especialmente en divisas. Por lo tanto, la ampliación de las capacidades de exportación es estratégica, ya que representa un modo genuino de conseguir divisas sin recurrir al endeudamiento.

HT: Cuando el presidente chino, Xi Jinping, presentó el proyecto de la ruta de la seda del siglo XXI, planteamos estructurar una vía navegable soberana para definir el vector logístico de la proteína vegetal que consume el gigante asiático, y que le habría permitido a nuestro país formar parte de un nuevo ordenamiento económico

que seguramente será dominante en este nuevo siglo. Con las políticas del actual gobierno las determinaciones serán definidas por las multinacionales, que como siempre buscarán maximizar su renta. De esta manera, se reduce sustancialmente la capacidad soberana para poner a resguardo los intereses nacionales. Esta claudicación supone el abandono de las aspiraciones

argentinas de consolidar su carácter de país marítimo.

Por tanto, es imprescindible que Argentina recupere su soberanía logística en sus ríos y mares, establezca un puerto de aguas profundas en La Plata y habilite el canal soberano de Magdalena. De un plumazo, el gobierno argentino dio vuelta el mapa de flujos de un espacio geopolítico que involucra también a Uruguay, Bolivia, Paraguay y al sur del Brasil. Argentina cedió la llave logística de la cuenca al aceptar el dragado que convertirá en canal de aguas profundas el acceso al puerto de Montevideo. Al capitular en la comisión administradora del Río de la Plata, el gobierno argentino echó por tierra décadas de política de Estado tendiente a salvaguardar los intereses argentinos y entregó resortes claves de poder a un puñado de consorcios exportadores.

La devastadora política de la logística por agua implementada por este gobierno, demoliendo toda la arquitectura geoestratégica definida por estas resoluciones, ha condenado a nuestro país a estar ausente en la definición geopolítica de la logística que seguramente definirá el orden económico futuro. En un giro hacia el

pasado, Argentina consolidó un esquema de transporte alumbrado en el siglo XIX para un mundo que ya no existe. Haber quedado excluidos de esta nueva visión condenará a la Argentina a profundizar su decadencia. Los resultados hablan por sí mismos: el endeudamiento externo, el déficit fiscal y comercial y la destrucción del aparato productivo y tecnológico de nuestro país son el resultado inexorable de un visión política y económica obsoleta e irracional. Estuvimos muy cerca de dar un salto significativo a hacia un país distinto, pero lamentablemente las sombras del pasado y de visiones fracasadas nos han hecho perder una nueva oportunidad.

En la planificación de un proyecto soberano es esencial reencauzar a la Argentina en un programa eficaz de industrialización, lo cual requiere, sin medias tintas, recuperar la soberanía monetaria con un Banco Central al servicio de la producción y el consumo, la soberanía energética con una YPF nacional, la Marina Mercante Nacional y la industria naval, además de la nacionalización de las empresas de servicios públicos. A todo ello se suma el desarrollo de una estructura

ferroviaria federal. La cuenca del Plata constituye uno de los puntos más sólidos de anclaje de cualquier programa económico que se proponga devolver al país un horizonte de crecimiento y desarrollo económico. La recuperación de soberanía y de la renta de la logística estratégica liga de manera estructural a esta hidrovía con el dilema del Atlántico Sur. La amenaza a la soberanía argentina en este espacio marítimo, sumado al reclamo diplomático por Malvinas, llaman a integrar en una misma visión geoestratégica los sistemas del Río de la Plata y Paraná, el control del transporte marítimo y la explotación pesquera y de hidrocarburos del Atlántico Sur.

Notas

[1]Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42174/S1700830_es.pdf

[2]Argentina había firmado acuerdos sobre transporte marítimo con Brasil y Paraguay donde se fijó que las mercaderías originadas en puertos argentinos, y destinadas a sus puertos, y viceversa, serían obligatoriamente transportadas en buques de bandera nacional de las Partes Contratantes, con participación en partes iguales, en la totalidad de los fletes generados. Estos acuerdos no permitía

operaciones de trasbordo en puertos de terceros Estados, lo que le quitaba a las compañías multinacionales extranjeras el negocio de los fletes.

Antes de firmar la resolución mencionada, Argentina había intentado llegar a un acuerdo con los países miembro del Mercosur para consolidar un Acuerdo de Transporte Marítimo Multilateral. Este no se pudo hacer efectivo debido a la presión de las compañías multinacionales que transportaban sus barcasas por nuestros ríos, como también por las compañías transportistas multinacionales asentadas principalmente en el puerto de aguas profundas de Montevideo.

[3]Por el que se traslada el 50 % de la proteína vegetal que se consume en el mundo.

ARTÍCULO

Por Juan Varela

LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA HOY. EJES PARA UNA INSERCIÓN INTERNACIONAL DESDE LA PERIFERIA



La dirigencia neoliberal que gobierna en los países más grandes de América Latina está impulsando un desmantelamiento institucional y político de aquellos espacios de concertación e integración regional que han servido de contrapeso a las potencias centrales, como CELAC y UNASUR; mientras que, por otro lado, se fortalecen los escenarios institucionales donde la potencia regional, Estados Unidos, puede imponerse con más facilidad, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alianza del Pacífico.

Por su parte, se busca ingresar a un club de y para países desarrollados como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En este análisis, Juan Varela muestra cómo, en un contexto caracterizado por el giro hacia el mercado-internismo por parte de las potencias mundiales, la respuesta de los gobiernos latinoamericanos está erróneamente dada por un regionalismo abierto que permite profundizar la dependencia de economías menos desarrolladas respecto de economías más desarrolladas. La integración latinoamericana sigue vigente pero por otros medios, perdiendo una oportunidad histórica.

Introducción

Como en tantos momentos de la historia mundial, asistimos en los últimos dos años a una realidad política global signada por la paradoja. Es muy conocido ya que los gobiernos de países centrales si bien practican el proteccionismo económico para con su propio territorio, son dados a recomendar políticas de apertura comercial a los gobiernos de países periféricos.

Como lo expresa Ha-Joon Chang [1], países que hoy son grandes potencias, como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, lograron ese desarrollo mediante políticas económicas proteccionistas y desestimando las prácticas de libre comercio que hoy recomiendan. En un trabajo posterior [2], el mismo especialista surcoreano agrega que *“cuando eran países en*

desarrollo, prácticamente ninguno de los países hoy desarrollados practicaba el libre comercio (ni una política industrial de liberalización como contrapartida doméstica). Lo que hacían era promover sus industrias nacionales mediante aranceles, tasas aduaneras, subsidios y otras medidas.”

Lo que está sucediendo en el mundo actual y que, en cierta medida discute la tesis de Chang, es que las propias potencias están retornando hacia el proteccionismo sin ambages ni señales equívocas. Tal es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos desde el inicio de la era Trump. En este mes de julio, antes de iniciar las negociaciones entre la Unión Europea y su país, el Presidente estadounidense difundió un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde desafiaba y ridiculizaba la supuesta intención aperturista de Europa (ver imagen).



Traducción: La Unión Europea está viniendo a Washington mañana para negociar un tratado de comercio. Tengo una idea para ellos. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea deben anular todas las tarifas, barreras y subsidios! Eso finalmente sería llamado Libre Mercado y Comercio Justo! Espero que lo hagan, estamos listos - pero ellos no lo estarán!

Si se leyera en tono caribeño, muchos pensarían que podría haber sido escrito por Hugo Chávez. Pero no es así, sino que se trata de una acción constante en muchos países cultores del libre comercio. En el sitio Global Trader Alert [3] se lleva un registro de las políticas implementadas por los gobiernos intentando influir en el comercio global y afectando el liberalismo comercial. Allí se ve claramente cómo muchos de los afectados por las medidas proteccionistas son, inclusive, países que otrora habrían estado en la vereda de enfrente, como el caso de China.

Ante esta situación paradójica, por el momento, los Estados más grandes de América Latina parecen haberse quedado estancados en un, si se permite el neologismo, *dumb-obamism* (Traducción: "Obamismo bobo").

Sucede que, imaginando una victoria de Hillary Clinton, se ha construido una inserción internacional descalzada respecto de lo que sucede en el mundo hoy, suponiendo que Estados Unidos tendrá una posición aperturista hacia nuestras exportaciones. Las acciones de la política de Trump nos deberían haber despertado de esos sueños y caer en cuenta de la realidad.

Como lo veremos más adelante, los países de la periferia han logrado avanzar cuando las grandes potencias se han enfrentado. Es por eso que, ante una situación histórica e inusual como en la que nos encontramos, es válido cuestionarse si la forma en la cual se modela la inserción internacional de nuestro país y, en consecuencia, el método de integración regional que practica nuestra diplomacia, se trata de un formato que colabora u obstaculiza un camino hacia mejores condiciones sociales, económicas y políticas en América Latina en general y en Argentina en particular.

Para profundizar en el análisis, parto de dos afirmaciones cuyo argumento se intentará esbozar a lo largo de este artículo.

Tesis 1: La integración aperturista y liberal se trata de una vinculación basada en el libre comercio y en el regionalismo abierto. Por eso, la dirigencia neoliberal que gobierna en los países más grandes de América Latina (Brasil, Argentina, Colombia y, hasta diciembre de 2018, México), ha ido impulsando un dismantelamiento institucional y político de aquellos espacios de concertación e integración

regional que han servido de contrapeso a las potencias centrales, como CELAC y UNASUR; mientras que, por otro lado, se fortalecen los escenarios institucionales donde la potencia regional, Estados Unidos, puede imponerse con más facilidad, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alianza del Pacífico. En otro caso, como MERCOSUR, se aplica un gradualismo orientado hacia el objetivo de conformar meramente una zona de libre comercio, con escaso contenido político y social. Por su parte, se busca ingresar a un club de y para países desarrollados como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Tesis 2: En un contexto caracterizado por el giro hacia el mercado-internismo por parte de las potencias mundiales, la respuesta de los gobiernos latinoamericanos está dada por un regionalismo abierto que permite profundizar la dependencia de economías menos desarrolladas respecto de economías más desarrolladas. La integración latinoamericana sigue vigente pero por otros medios, perdiendo una oportunidad histórica.

Más OCDE, menos UNASUR. Un regreso al regionalismo abierto

El regionalismo abierto es una conceptualización esbozada por Sanahuja (2012) [4] para referirse a la integración económica regional deudora de las políticas liberales del Consenso de Washington, asentándose en acuerdos regionales con bajos aranceles externos y barreras al comercio, así como también en una mayor liberalización entre los países de la región, dando mayor participación a los mercados.

Este tipo de integración, que se vio afectada por las políticas estatistas que surgieron en la década del 2000, supo mantenerse vigente en los países andinos a través de la Alianza del Pacífico, promoviendo una inserción internacional abierta al mundo, caracterizada por la clásica fórmula de exportación de bienes primarios e importación de bienes manufacturados.

En un reciente artículo publicado en la revista Nueva Sociedad [5] los autores hacen hincapié en que las nuevas derechas en América Latina están haciendo un giro liberal con

alineamiento aperturista, liberalización financiera, ajuste fiscal y flexibilidad laboral. En pocas palabras, se trata de un Consenso de Washington renovado. No obstante, advierten que *“no parece tan evidente que ese ciclo sea tan sólido y duradero como se ha proclamado, ante un conjunto de desafíos estructurales para el que esas opciones ofrecen como principal respuesta un discurso globalista que va a contramano de las principales tendencias internacionales.”* (Sanahuja y Comini, 2018).

Es decir, el giro de las cuatro mayores economías de la región (Brasil, México, Colombia y Argentina) hacia la apertura indiscriminada impide iniciar procesos de mejora en los acuerdos regionales que mostraban indicios de agotamiento, como CELAC, UNASUR, Mercosur y OEA. De hecho, a partir de mayo de este año Colombia logró ingresar al selecto Club de la OCDE del cual ya participan México y Chile. Mientras tanto, Brasil y Argentina intentan hacer los deberes para poder también ser parte.

Ingresar a este grupo implica someterse a diagnósticos, evaluaciones, adecuaciones legislativas

y recomendaciones realizadas por 23 comités diferentes, los cuales exigen políticas públicas acordes con las que necesitan los países centrales para mantener sus privilegios.

Sin embargo, el camino de la dependencia no es tan fácil como se cree. De hecho, este año Argentina no pudo ingresar, a pesar de sus ingentes esfuerzos por mostrarse proclive a aceptar los mandatos desde París [6], donde se encuentra la sede del organismo. Aún somos demasiado proteccionistas, parece ser la opinión de **Ángel Melguizo**, Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, quien afirmó que *"el riesgo más relevante que vemos es el del proteccionismo desde 2012 a esta parte"*. [7]

Es a todas luces clara la política de inserción global, mostrando que ya no hay intenciones de propiciar un marco de cooperación e integración más asentado en el Estado que en el mercado y más enlazado con nuevas preocupaciones en torno a estrategias de desarrollo económico y social, que con cuestiones vinculadas a la globalización financiera o a los desafíos de seguridad de la era post guerra fría.

Como lo afirma Cristian Carrillo [8] en su nota de marzo en el diario Página 12, el ingreso a la OCDE se puede dar siempre y cuando se cumpla con la disminución de barreras al comercio, la flexibilización del mercado laboral y la reducción de impuestos patronales, entre otras medidas.

Por otro lado, con respecto a UNASUR y CELAC, el desmantelamiento institucional y político que se está practicando y el cada vez menor peso que tienen estos bloques en la política exterior de los cuatro principales países de América Latina es una manifestación del norte que trazan los gobiernos de Temer, Macri, Duque y (con sus coletazos finales) Peña Nieto.

No son inocentes las decisiones de los gobiernos de Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú respecto a abandonar la Unión de Naciones Sudamericanas, así como la intención de Ecuador de que el edificio de la Unión, situado en Quito, pueda ser utilizado para otros fines. Solo con la membresía de Bolivia, Uruguay, Guyana, Suriname, Venezuela y Ecuador, poco peso le queda ya a este bloque.

Por su parte, CELAC se ha convertido en un mero foro de debate con escasa o nula participación de presidentes en sus cumbres y en el cual se analizan temas generales sin líneas concretas de acción. Un declaracionismo vacío es lo que demuestran las últimas cumbres CELAC-China y CELAC-Unión Europea.

A contramano del mundo. Una inserción poco inteligente

Estamos transitando un momento histórico, en el cual las dos principales potencias globales, China y Estados Unidos, se batan a duelo en una guerra comercial cuyo fin y consecuencias aún desconocemos. Está en juego el futuro del multilateralismo político y comercial como lo hemos conocido desde la última mitad del Siglo XX.

En ese marco, es importante pensar que, como lo afirma Gullo (2014) [9], *“los momentos en que las grandes potencias se encuentran enfrentadas son los momentos históricos óptimos para que un Estado ubicado en la periferia del sistema intente consolidar su poder nacional y alcanzar el máximo de autonomía posible.”*

Pero además de hablar de la guerra arancelaria entre dragones y águilas, es interesante dar una mirada en la otrora triunfante Europa, desde la cual se nos daban lecciones sobre cómo realizar una integración regional-comunitaria exitosa, para comprender la crítica situación política y económica. Las crisis políticas en España e Italia, así como el Brexit y la falta de confianza en el Euro, se suman a la manifiesta incapacidad para resolver el problema migratorio.

Si alguna vez en nuestra zona bebimos de la cristalina democracia europea, de la agresiva y pujante seguridad norteamericana o del exitoso capitalismo chino; está claro que hoy el mundo nos muestra que debemos pensar nuestros propios caminos, desde nuestras realidades y desde allí salir hacia la esfera internacional.

En un interesante libro de uno de los pensadores del establishment intelectual estadounidense, Richard Haass [10], este reconoce que el orden mundial tal como lo conocimos desde el fin de la guerra fría está cambiando y que uno de las principales causas de este cambio está en la abdicación, no en el aislacionismo, de Estados Unidos.

El Presidente Trump está cuestionando tres cuartos de siglo de política exterior norteamericana que, bajo un rótulo liberal-capitalista con pinceladas de republicanismo-institucionalista, se ha servido de esa máscara para aplicar las más crueles intervenciones militares, comerciales y políticas.



Desde otra mirada, Moniz Bandeira (2016) [11] en su más reciente y último libro, publicado antes de su muerte, ya planteaba el contexto crítico que estaba viviendo el mundo, manifestándose con claridad el fracaso previsible de una política exterior estadounidense que *“pautada por los intereses de las grandes corporaciones bancarias, petrolíferas y de material bélico, desde el fin de la Unión Soviética se empeñó cada vez más en la implantación internacional de full-spectrum dominance y full-spectrum superiority, tierra, mar y aire.”*

Volviendo a Gullo (2014), este afirma que, cuando las trece colonias americanas alcanzaron la independencia, fue gracias a que España y Francia estaban enfrentadas a Inglaterra. Asimismo, Argentina y Brasil lograron avanzar en un proceso de industrialización cuando entre 1939 y 1945 las principales potencias se encontraban en guerra.

Desde la perspectiva que se sostiene en el presente análisis, la integración y la inserción internacional no operan en el vacío ni son conceptos abstractos o neutros, sino que, por lo contrario, están condicionados por una historia y un contexto de factores de poder económico, político, cultural y militar que le dan forma al terreno en el cual se materializa el juego de la integración.

Si analizamos un escenario global en el cual los cuatro principales Estados-Bloques de poder; que son Estados Unidos, China, Rusia y Unión Europea; se encuentran inmersos en estas problemáticas que mencionábamos más arriba; se presenta una oportunidad para participar de las nuevas tendencias internacionales desde un regionalismo activo y

selectivo, no desde un individualismo pasivo e indiscriminado.

Conclusiones

Mientras los países de nuestra región y sus diplomacias miran con añoranza hacia el pasado regionalismo abierto y mendigan ser incluidos en vetustos clubes como lo es la OCDE, las oportunidades que surgen en torno a China, India, África o la zona Euroasiática se pierden a diario.

Los recursos son escasos y deben ubicarse de manera estratégica. Para dar un pequeño ejemplo de nuestras prioridades, basta con ver que en la Embajada de Argentina en Roma prestan funciones ocho diplomáticos y tres agregados, mientras que en Vietnam solo hay cuatro diplomáticos de carrera, siendo una economía con la cual tenemos una relación comercial superavitaria y con mayores posibilidades de incrementar el vínculo. Mientras en la Embajada de Argentina en la India, uno de los países más importantes del mundo, solo hay seis diplomáticos, en la Embajada Argentina en Canadá, un país considerablemente menos relevante, hay siete

diplomáticos. Y así podríamos seguir adicionando casos.

Por lo tanto, para concluir es relevante recalcar que es erróneo pensar que las estrategias que tracen países como Argentina deben seguir al pie de la letra las líneas de acción marcadas por una Europa en crisis, por un FMI a quien solo unos pocos países acuden, por un Estados Unidos más preocupado por su acero que por la democracia en Siria. Es un mundo más realista, es cierto, pero tal vez más expuesto y desenmascarado.

En ese mundo, la inserción internacional ni por sí sola ni por el libre juego del mercado nos lleva a beneficios estáticos como la eficiencia productiva, el mejoramiento de la competitividad o la radicación de nuevas inversiones.

Tampoco la inserción puede restringirse solamente a tomarse *selfies* con líderes internacionales o a que nuestros cancilleres sean efectivos mayordomos organizadores de cumbres internacionales. Las

Cancillerías no son empresas de organización de eventos.

La reconstrucción del tejido político-cultural, económico-comercial e institucional-normativo que deberá hacerse en un deseable próximo ciclo latinoamericanista, progresista o nacional-popular, implicará un esfuerzo por dismantelar las marcas institucionales que habrá dejado esta búsqueda incesante por formar parte de lo que se llama el “mundo desarrollado”.

Notas

[1]Ha-Joon Chang (2004). Retirar la escalera: La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica. Ed. La Catarata. Madrid.

[2]Ha-Joon Chang (2013). Patada a la escalera, la verdadera historia del libre comercio. Disponible en <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/41244/42806> . Consultado el día 27/07/2018

[3]https://www.globaltradealert.org/global_dynamics Consultado el día 27/07/2018.

[4]Sanahuja, José Antonio (2012). “Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica.” En “El regionalismo post-liberal en América Latina y el Caribe. Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos”. CRIES.

[5]Sanahuja, José Antonio y Comini, Nicolás (2018). “Las nuevas derechas latinoamericanas frente a una globalización en crisis.” <http://nuso.org/articulo/las-nuevas-derechas-latinoamericanas-frente-globalizacion-en-crisis/> Consultado el día 31/07/2018.

[6]Como afirma Carlos Bianco en la nota titulada “Argentina, OCDE y neoliberalismo al palo, las recomendaciones emanadas de la tecnocracia parisina han demandado profundizar la liberalización comercial, desregulación financiera, flexibilización laboral y el ajuste previsional. <https://www.pagina12.com.ar/111872-argentina-ocde-y-neoliberalismo-al-palo>. Consultado el día 31/07/2018.

[7]OCDE: Argentina no crece suficiente para salir de la trampa del ingreso medio. INFOBAE. <https://www.infobae.com/economia/2018/06/20/ocde-argentina-no-crece-suficiente-para-salir-de-la-trampa-del-ingreso-medio/> Consultado el día 31/07/2018.

[8]Cristian Carrillo. Diario Página 12. “Para entrar a la OCDE, primero hay que sufrir”. <https://www.pagina12.com.ar/102682-para-entrar-a-la-ocde-primero-hay-que-sufrir> Consultado el día 01/08/2018.

[9]Gullo, Marcelo. (2014). “La insubordinación fundante: Breve historia de la construcción del poder de las naciones.” Biblos. Buenos Aires.

[10]Haass, Richard (2018) “A world in disarray. American Foreign Policy and the crisis of the old order.” Ed. Penguin Books. Kindle Edition. New York.

[11]Moniz Bandeira, Luiz Alberto (2016). A desordem mundial. O espectro da dominação. Ed. Civilizacao Brasileira. Río de Janeiro.

ARTÍCULO

Por Nicolás Canosa

REFLEXIONES EN TORNO AL TLC MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA



A instancias de la próxima negociación entre las Partes a llevarse a cabo en Montevideo durante el mes de septiembre, nos proponemos abordar el cuadro de situación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, analizando los principales aspectos en los que se ha avanzado y la postura que ha expresado el bloque mercosureño en las ronda birregionales con la contraparte europea.

Estado de situación

El cambio de signo político que se produjo en las dos principales economías del Mercosur -Argentina y Brasil- dio lugar a una nueva etapa en el proceso negociador iniciado hace más de 20 años con la Unión Europea (en adelante UE). El ex canciller brasileño, Aloysio Nunes Ferreira, manifestó a la sazón que los denominados “gobiernos progresistas” de Sudamérica habían “demorado” los acuerdos y que la salida -expulsión- de Venezuela del Mercosur (en adelante MCS) había tenido un “efecto dinamizador” sobre el proceso. Este discurso se emparenta con las apelaciones del gobierno a la necesidad de “reinsertarse en el mundo”, metáfora de una **nueva funcionalidad conferida a la política exterior por estos gobiernos: anclar mediante compromisos internacionales las reformas estructurales internas que buscan definir una nueva matriz económico-distributiva en la región y hacia el interior de cada país.**

Por parte del MCS, y principalmente del gobierno argentino, se esperaba firmar el TLC en diciembre de 2017, en el marco de la Cumbre Ministerial de la

Organización Mundial de Comercio (OMC) realizada en Buenos Aires. No obstante, las fricciones en las negociaciones y las pretensiones de mayores concesiones por parte de la UE frustraron esa meta. Durante el 2018 hubo varias rondas de negociación en ambos continentes. Demostrando una falta de *timing* político y de apreciación del estado de la negociación, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, había adelantado que en la segunda semana de julio todos los cancilleres de la Unión Europea y el Mercosur iban a dar por cerrado el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques” [1]. Similar error de evaluación se le puede adjudicar al canciller argentino, Jorge Faurie, que ante el fracaso en las negociaciones de julio buscó demostrar cierto optimismo afirmando que en septiembre podrían darse por finalizadas las negociaciones. [2]. Esto último fue negado por un representante de la Comisión Europea, que sostuvo que era imposible llegar a esa fecha con el acuerdo cerrado, mientras que la Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, mencionó que pese a los progresos

seguía habiendo una lista larga de asuntos complicados por abordar.

Resulta llamativo, entonces, que a pesar de la insistencia y ansiedad del MCS por suscribir el acuerdo, es la UE la que aparece más reacia en estampar su firma. ¿Esto obedece a la fragilidad de los posicionamientos del MCS en las negociaciones y, en consecuencia, a un aprovechamiento de la UE para profundizar las concesiones? La contraparte europea alega que hay sectores sensibles en su ámbito que se verían perjudicados ¿Cuánto tienen que ver las presiones del sector agrícola francés e irlandés? Las declaraciones sobre la imposibilidad de firmar el acuerdo este año, ¿obedecen a una cuestión táctica en el plano de la negociación o a una dificultad real relacionada a las presiones que recibe la UE? ¿Influye la situación geopolítica actual, caracterizada por disputas comerciales y un aumento de medidas proteccionistas? ¿Pesán más estas cuestiones que la posibilidad de la UE de presentarse como un bloque que promueve el libre comercio, como lo hizo con Japón? [3] ¿El MCS no comprende los tiempos políticos de la Unión Europea y por eso se apresuró

en afirmar, durante el 2017, que cada vez estaba más cerca de concretarse? ¿Influye el incierto destino de las elecciones en Brasil?

Sin dar respuesta a todos estos interrogantes, pero sí a algunos de ellos, en este artículo se hará foco en el actuar del MCS en las rondas de negociación y, hacia el final, en el impacto económico, social y laboral que entrañaría la eventual firma del TLC.

La “estrategia” del Mercosur: concesión y flexibilización de posiciones

El acuerdo que se negocia actualmente tiene dos componentes o “pilares”: el político y el comercial. [4] La redacción de los capítulos correspondientes al primer pilar está prácticamente acordada quedando por resolverse el segundo, en el que se negocian la ampliación del acceso a los respectivos mercados de bienes, servicios y compras públicas, y las disciplinas/cláusulas conexas –de mayores efectos potenciales que la desgravación y liberalización arancelaria (reglas de origen, normas técnicas, medidas de defensa

comercial, asuntos aduaneros y mecanismo de solución de diferencias)– así como temas de propiedad intelectual y defensa de la competencia.

En el marco de la negociación del capítulo comercial, la UE no reconoce en ningún tramo el concepto de asimetría entre las partes y avanza en consecuencia. Pese a que quintuplica en PBI al Mercosur, registra casi diez veces más patentes al año y más que duplicó sus exportaciones a la región en los últimos diez años, la UE ha obtenido hasta el momento un sinnúmero de concesiones en materia de desgravación de bienes, reglas de origen, compras públicas, defensa comercial y propiedad intelectual, entre otras. La posición de la UE durante la negociación es casi siempre de máxima: con relación al período de transición para la aplicación de certificados de origen, por ejemplo, la UE plantea apenas un año de gracia frente a los 15 demandados por el MCS.

Es comprensible que en el desarrollo de una negociación de cualquier índole exista una disposición a ceder en algunos aspectos, en función de

avanzar en otros ámbitos. El problema que encontramos en el modo de proceder del Mercosur es que la **concesión y flexibilización de posiciones es una conducta constante por parte del bloque sudamericano**, sin que ella redunde en beneficio a compensación alguna.

En este sentido, es preciso destacar el rol de Argentina, que concede y flexibiliza posiciones incluso superando las expectativas europeas (en relación a compras públicas y patentes, por ejemplo) o peor, en contra de las *líneas rojas* o límites que plantean sus pares en el bloque suramericano. Esto ocurre en los casos de la *Prohibición de Admisión Temporal y Draw Back* [5], en el cual solamente nuestro país se dispuso a flexibilizar la posición en función de la firma del acuerdo, desestimando el límite planteado por los otros países del bloque. Por otra parte, y en contra de los intereses de Brasil, Argentina se manifestó dispuesta a aceptar la postura de la UE respecto al transporte marítimo, que implicaría desplazar operaciones que realizan transportistas argentinos o de la región en favor de buques de navieras europeos.

Otro punto sensible refiere a las patentes. Allí, sólo Argentina manifestó aceptar la propuesta europea de que los países del MCS accedan al *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, un sistema que facilita comenzar en simultáneo trámites de patentes en diferentes países, lo cual preocupa al MCS por la posibilidad de un aumento importante de solicitudes de patentes foráneas.

La concesión de un futuro soberano

La sistemática concesión y flexibilización de posiciones en el modo de actuar del Mercosur en el proceso negociador del TLC con la Unión Europea tiene un único horizonte posible: la consolidación de un patrón de especialización productiva en donde nuestros países se limitarán a funcionar como meros proveedores de materias primas, sin posibilidad alguna de diversificar exportaciones ni otorgarles mayor valor agregado. Sin embargo, ni siquiera hay garantías de un beneficio en término de divisas por aumento de exportaciones primarias. Es previsible que la UE siga sosteniendo las subvenciones y la protección de su

sector agrícola, condición que intentan imponer en la negociación y que justifican por la existencia de presiones internas proteccionistas en sus propios países. Se oponen expresamente en las negociaciones a discutir este asunto, frente al planteo del MCS de compensar los efectos negativos que se derivan de aquellos productos que son subsidiados por la UE.

Asimismo, es posible afirmar que la firma de este acuerdo no sólo conduciría a un proceso de reprimarización y desindustrialización de nuestra economía, sino que disminuiría significativamente el intercambio comercial intra-Mercosur, mayoritariamente de alto valor agregado. Esto tiene serias implicancias geopolíticas, ya que constituiría un enorme obstáculo al proceso de integración política económica y social del Cono Sur, en el sentido de conformarse como un polo de poder autónomo respecto a las grandes potencias.

Queda claro, entonces, que el Mercosur está dispuesto a firmar un Tratado de Libre Comercio con las características típicas de los acuerdos neoliberales de nueva generación:

legislaciones nacionales desreguladas y actos soberanos cancelados en función de la “seguridad jurídica”; una integración subordinada y desequilibrada al mercado global y la aceptación de una nueva división mundial del trabajo, poniendo en severos riesgos los puestos laborales, la industria y el salario de los pueblos y países del Mercosur. Se concede la posibilidad de un futuro soberano.

Notas

[1]Recuperado de:
<https://www.infobae.com/politica/2018/06/19/el-mercosur-y-la-union-europea-buscaran-cerrar-el-acuerdo-de-libre-comercio-en-julio/>

[2]Recuperado de:
https://www.clarin.com/economia/economia/union-europea-frena-optimismo-argentina-acuerdo-rapido-mercosur_0_HkPeBnNNX.html

[3] “La firma de este acuerdo muestra al mundo la voluntad política inquebrantable de Japón y de la UE de convertirse en los campeones del intercambio libre y de guiar al mundo en esta dirección mientras se extiende el proteccionismo”. Declaraciones de Shinzo Abe, primer ministro de Japón.
 “En lo que a nosotros respecta, no hay protección en el proteccionismo. Y no hay unidad en el unilateralismo”. Declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
https://elpais.com/internacional/2018/07/17/actualidad/1531844759_117137.html

[4]Hasta 2017 eran tres pilares. Comercial, político y cooperación. Este último se subsume en el político, quedando los dos mencionados.

[5]Esto refiere a las preferencias o exenciones arancelarias a insumos importados por las partes. La UE pretende no aplicar preferencias arancelarias a las exportaciones de productos finales del Mercosur elaborados en base a insumos importados bajo regímenes suspensivos de exportación. Esto afecta al MCS ya que impide diversificar exportaciones hacia la UE y potencia la dependencia de insumos europeos.

ARTÍCULO

Por Fernando Oviedo

LA DOLARIZACIÓN DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS



La estrategia económica de Cambiemos, y el modelo de política económica puesto en ejecución a partir del 10 de diciembre de 2015, tiene como norte y premisa esencial la inserción subordinada de la economía argentina en el mercado mundial, en el marco de una reedición de la lógica de las ventajas comparativas estáticas de la vieja teoría del comercio internacional del liberalismo clásico. Todo esto acompañado de una virulenta modificación de la matriz distributiva de la economía argentina, a pedido de las distintas fracciones del bloque de poder económico que integran y sustentan al actual gobierno, luego de doce años de vigencia de un esquema de política económica de corte heterodoxo.

En ese sentido, la eliminación de las retenciones o derechos de exportación al trigo, maíz, al girasol, a la carne, y la reducción de cinco puntos porcentuales de las retenciones a la exportación de soja sin procesar, en el primer año de gobierno de Cambiemos, más la reanudación de la reducción en el corriente año a razón de medio punto porcentual por mes a los fines de llegar a diciembre de 2018 con una alícuota del 24% y a fines de 2019 con una alícuota del 18%, va en sintonía con lo mencionado.

Cabe recordar que en el 2015 los derechos de exportación tenían una alícuota del 35% para la soja, 23% para el trigo y 20% para el maíz. Desde diciembre de 2015, con el Gobierno de Macri, el trigo y el maíz tienen 0% de retenciones y la soja pasó de un 35% a un 30%, manteniéndose esta alícuota durante todo el 2017, implementándose un esquema de baja paulatina a partir de enero de 2018, a razón de 0,5 puntos porcentuales mensuales, por lo que la exportación del poroto de soja terminará el 2018 con una alícuota del 24%.

La desarticulación del esquema de retenciones introdujo una serie de

inequidades y desequilibrios en la macroeconomía y en el sistema productivo, los cuales fueron exacerbados en virtud a la inédita combinación de la eliminación de retenciones aludida con una virulenta devaluación del tipo de cambio, acontecida a comienzos del gobierno de Macri y en el reciente proceso devaluatorio de los últimos meses, lo cual configuró una transferencia de ingresos al sector de características elefantiásicas.

Las retenciones o derechos de exportación, amén de obrar como fuente de ingresos para el fisco nacional, tienen una serie de virtudes macroeconómicas que son ocultadas sistemáticamente por el discurso económico dominante, a saber:

- 1) Actúan como instrumento de redistribución de ingresos, ya que gravan la renta diferencial de la tierra y las superutilidades derivadas de una devaluación o de un alza del precio internacional. Estas superutilidades poco tienen que ver con el esfuerzo empresarial y si tienen mucho que ver con la

productividad natural de la Pampa Húmeda.

Este efecto redistributivo se potencia teniendo en cuenta que, según estudios varios sobre la base de datos del último censo nacional agropecuario [1], la propiedad de la tierra sigue estando muy concentrada en la Argentina. De los más de 170 millones de hectáreas agropecuarias en todo el país, 74,3 millones están en poder de tan sólo 4000 dueños.

En la región pampeana, existen 4.110.600 hectáreas en manos de solo 116 dueños. También se verifica una muy alta concentración de la producción, añadiéndose a la altísima concentración de la propiedad. Estos sectores hoy conforman parte principal de la base de sustentación política de Cambiemos.

- 2) Actúan como un instrumento de equilibrio de la estructura productiva al incorporar incentivos a la agregación de valor.

- 3) Actúan como instrumento de desacople del precio internacional. Sin retenciones los precios relativos internacionales se transferirían al mercado interno y el campo sería un apéndice más del mercado mundial.

Sobre el último ítem es que nos interesa detenernos, ya que se encuentra en directa relación con el título del presente artículo. Tal como acabamos de expresar, en ausencia de retenciones, los productores y/o acopiadores de bienes alimenticios exportables tienden a vender sus productos en el mercado interno al equivalente en moneda local del precio internacional, es decir, al precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio. Con la vigencia de retenciones a las exportaciones se reduce el precio que cobra el productor por tonelada vendida al exterior.

De esta forma, al disminuir el precio de referencia en el mercado mundial también cae el precio local. Las retenciones siempre desacoplan los precios internos de los precios internacionales, reduciendo los precios internos aún frente a aumentos de los

precios internacionales y compensando el efecto inflacionario provocado por devaluaciones del tipo de cambio.

Como producimos alimentos en cantidad y calidad, en el marco de las notables condiciones de fertilidad de la Pampa Húmeda, el precio interno de la producción de cereales y oleaginosas siempre tiende a ser más bajo que el precio internacional. A continuación, ofrecemos un ejemplo simple y elemental, a modo ilustrativo: supongamos que la tonelada de trigo en el mercado interno cuesta \$ 5.500,- y en el mundo, u\$s 230, lo que equivale a \$ 7.015,- al tipo de cambio de \$ 30,50 por dólar. Entonces, el precio interno siempre es más barato en el mercado local. En función a esto, para que el productor y/o acopiador no se viera tentado en exportar la totalidad de la producción, vendiéndole todo al exportador, se le aplicaba una retención del 23% que le bajaba el precio de exportación a casi \$5.400, prácticamente el mismo que en el mercado interno, o lo que es igual las retenciones actuaban como un tipo de cambio diferencial siendo este en la práctica un 23% menor que el tipo de cambio oficial.

Hoy, cómo ya no hay retenciones, y para que el productor y/o acopiador no venda la totalidad de la producción en el mercado internacional, el mercado interno le tiene que pagar el mismo valor que le abona el mundo, es decir, \$ 7.015, según el ejemplo. Esto ilustra a las claras como el precio interno del alimento, teniendo en cuenta que la canasta exportadora del país es semejante a la canasta de consumo interno, sube de manera considerable por la eliminación de retenciones, pasando a depender íntegramente del precio internacional. Por otro lado, con cada suba del precio del dólar, es decir del tipo de cambio, el precio en dólares que cobra el exportador se incrementa nominalmente, lo cual refuerza este proceso de internacionalización y dolarización del precio de la comida.

Para corroborar lo afirmado y haciendo un repaso por algunos indicadores que ofrece la coyuntura económica del 2018, observamos como el tipo de cambio subió nominalmente casi un 60% [2] entre enero y julio, siendo la tasa de inflación acumulada para los primeros siete meses del año del 19,6% [3], mientras que el precio de la harina

de trigo subió, solo para los primeros seis meses de 2018, un 87,7% [4].

Teniendo en cuenta todo lo expresado, estamos en condiciones de afirmar que solo bajo dos condiciones es admisible la ausencia de derechos de exportación o retenciones a la exportación de alimentos: 1) En el marco de un sistema productivo industrial completo e integrado, con fuerte presencia de la Manufactura de Origen Industrial en la canasta exportadora, lo que evitaría que esa canasta exportadora coincida casi exactamente con la canasta alimenticia de los argentinos. 2) En el marco de la no existencia del latifundio, con la condición de ausencia de concentración en la propiedad de la tierra, lo cual no sucede en la Argentina, conforme a lo manifestado en párrafos anteriores.

Ninguno de esos dos requisitos se verifican en la Argentina, por lo que, en el marco de un esquema macroeconómico de retenciones cero, y conforme a todo lo expresado, estamos en condiciones de afirmar que el precio del alimento en la Argentina se encuentra dolarizado, atado doblemente a la evolución nominal del tipo de cambio y al precio internacional

de los alimentos, en cuya determinación, Argentina tiene poca incidencia. Esto claramente constituye un atentado a la mesa de los argentinos, amén de lo que significa que el Tesoro del Estado Nacional pierda ingresos en un contexto de ajuste fiscal recesivo severo.

Será tarea de una futura gestión política y económica de signo contrario a la actual, revertir esta infausta lógica que no solo provoca desigualdades flagrantes en términos de distribución de la renta diferencial de la tierra, y en términos del encarecimiento del precio de la comida para el conjunto de los argentinos, sino que también provoca severos desequilibrios macroeconómicos y productivos en términos de pérdida de recaudación fiscal, en términos de caída del consumo popular (por la baja elasticidad precio de la demanda de alimentos, lo que redundará en que la población no sacrifique consumo de alimentos y sí consumo de otros bienes) y en términos del desincentivo tanto a la agregación de valor, como a la industrialización de la producción primaria y a la diversificación de la matriz productiva del país.

Notas

[1] Datos del Último Censo Nacional Agropecuario. Año 2002.

[2] Según datos del BCRA:
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Tipos_de_cambios.asp

[3] INDEC, Informe publicado el 15/08/2018.

[4] Informe del Observatorio de Políticas de UNDAV, el cual trabajó sobre información estadística aportada por el INDEC. Agosto de 2018.

ARTÍCULO

Por Gustavo Andrés
Di Pace



ARGENTINA EMERGENTE



"Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las ban..., las velas",
Conferencia de prensa de Mauricio Macri,
18 de julio de 2018.

La “tormenta” en la cual, según el presidente, se encuentra la Argentina, no es otra cosa que una típica crisis de balanza de pagos caracterizada por elevados niveles de déficit gemelos – fiscal y comercial –, una aguda restricción externa debido al creciente nivel de endeudamiento en moneda extranjera y una caída de la actividad económica producto, en gran medida, de una tasa de interés elevadísima que desincentiva la actividad productiva y favorece la especulación.

Frente a este complicado pronóstico, Macri y su “tripulación” parecieron recobrar cierto optimismo cuando en julio pasado la Morgan Stanley Capital International (MSCI) anunció la recategorización de Argentina como *mercado emergente*. A la sazón, funcionarios de Cambiemos y algunos analistas afines estimaron que a partir de junio de 2019, fecha en la que este nuevo estatus se haría efectivo, nuestro país estaría en condiciones de recibir capitales “frescos” por un monto que va de los 3.800 a los 7000 millones de dólares [1]. Esto último siempre y cuando, según advierte la propia MSCI, no se retomen los controles a la libre circulación de capitales [2].

Lejos de centrar su análisis en variables vinculadas a la actividad económica real, la matriz productiva, el nivel de empleo o los resultados de la balanza de pagos, la MSCI ponderó positivamente el acuerdo del gobierno argentino con el FMI, señalando el compromiso de la actual administración para seguir adelante con sus planes de reforma estructural y normalización macroeconómica [3]. A este respecto, un artículo publicado en el diario La Nación [4] señala que la recalificación de Argentina habilitaría a fondos que solo pueden invertir en emergentes a que tomen como alternativa los bonos argentinos, lo cual haría subir de precio aquellos activos y, por lo tanto, haría caer su tasa de financiación. Esto permitiría al gobierno emitir bonos a un costo más bajo, reestructurando la deuda vieja a un valor más barato y pagando menos intereses.

Más allá del optimismo oficialista frente a este anuncio [5] y del oxígeno que esta recategorización pudiera dar a los devaluados bonos argentinos, tal y como hemos comprobado por estos días, el supuesto “viento a favor” del nuevo estatus se esfumó en cuestión

de semanas. Así lo advertía ya el Instituto de Finanzas Internacionales [6] (IFF por sus siglas en inglés), que junto a la calificadora de riesgo Standar & Poor's situaron a la Argentina entre una de las cinco economías emergentes más vulnerables del mundo frente a una crisis externa y al encarecimiento del dinero a nivel global. S&P, particularmente, ubicó a nuestro país entre los más perjudicados por la política de normalización de tasas de interés llevada adelante por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay que señalar que, en el 2015, Argentina no formaba parte de este grupo de economías "frágiles" [7].

BlackRock, por su parte, y el fondo de inversión Templeton (ambos actores claves para el oficialismo en el último salvataje financiero [8] del mes de mayo) asignaron a la Argentina uno de los mayores niveles de riesgo soberano entre las economías emergentes [9]. Esto último aparece reflejado en el Índice de Riesgo Soberano (*BlackRock Sovereign Risk Index* [10]), en el cual nuestro país ocupa el puesto número 55 de un total de 60, sólo por encima de Ucrania (56), Grecia (57), Egipto (58), Líbano (59) y Venezuela (60).

Merece señalarse que la Argentina ocupaba el puesto 45 a principios de diciembre de 2015.

Siguiendo con la analogía naviera y los términos confusos de la meteorología macrista, la calificación como *mercado emergente* debería plantear para los analistas oficialistas y funcionarios del gobierno ciertos nubarrones en un horizonte próximo. En un artículo conjunto recientemente publicado en *Project-syndicate* [11], sus autores llaman la atención sobre los posibles avatares que podrían sufrir las economías emergentes de América Latina, producto de las tensiones comerciales generadas por la política proteccionista de Donald Trump y un escenario global de aumento de tipos de interés en las principales economías desarrolladas. Mismo pronóstico es compartido por el economista Nouriel Roubini [12] (reconocido por haber anticipado y advertido la última gran crisis financiera internacional), quien avizora una combinación explosiva de dólar fuerte, tipos de interés más altos y menos liquidez internacional. Específicamente para la Argentina, esos tres elementos combinados afectarían la capacidad de pago del país, ya que se

encarecería la divisa norteamericana, en un contexto de escasez de nuevos fondos a ser prestados o invertidos.

Similares advertencias son reafirmadas en el último informe del FMI [13] sobre perspectivas de la economía mundial. En dicho documento, se mencionan las crecientes tensiones comerciales y las presiones que genera el mercado sobre las monedas de algunas economías con fundamentos más débiles, agregando una revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento de la Argentina. Asimismo, la suba de aranceles aplicada por los Estados Unidos y las consecuentes represalias de sus socios comerciales podrían descarrilar el proceso de recuperación de la economía internacional, alterando los flujos de capitales debido a un mayor nivel de volatilidad. El Fondo Monetario también revalida las advertencias sobre la continuidad en la trayectoria de aumento de las tasas de interés, lo cual podría reducir más las entradas de capital a los mercados emergentes.

Parecería ser, entonces, que la calificación de Argentina como mercado emergente sólo profundizará aún más el endeudamiento y la fuga de

capitales. Siempre y cuando quede algo que fugar.

Notas

[1]Rafael Mathus Ruiz (junio, 2018). “La Argentina alcanza la categoría de mercado emergente y se abre la puerta a la llegada de capitales Externos”. [en línea: <https://www.lanacion.com.ar/2145413-la-argentina-alcanzo-la-categoria-de-mercado-emergente-y-se-abre-la-puerta-a-la-llegada-de-capitales-externos>].

[2]Javier Rodríguez Petersen y Luz de Sousa Quintas (junio, 2018). “MSCI reclasificó a la Argentina como mercado emergente”. [en línea: <https://www.cronista.com/finanzasmercados/MSCI-reclasifico-a-la-Argentina-como-mercado-emergente-20180620-0073.html>].

[3]Sofia Diamante (junio, 2018). “¿Emergente o de frontera? Por qué el miércoles es un día clave para la economía. [en línea: <https://www.lanacion.com.ar/2145122-la-argentina-no-pierde-la-esperanza-de-ascender-a-emergente>].

[4]Sofia Diamante (junio, 2018). “Argentina, mercado emergente: Por qué la definición del MSCI es clave para la economía argentina”. [en línea: <https://www.lanacion.com.ar/2145414-argentina-mercado-emergente-por-que-la-definicion-del-msci-es-clave-para-la-economia-argentina>].

[5]El 20 de junio, el Presidente escribió en su cuenta de Twitter: “Buenas noticias! La Argentina vuelve a ser mercado emergente y se abre a la llegada de capitales externos.” Mientras que el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne señaló que, “ser emergentes va a darnos acceso a capital más barato y por ende, más inversión, más crecimiento y más empleo para todos los argentinos”

[6]Política Argentina (enero, 2018). “Argentina está entre los países más vulnerables a crisis externas”. [en línea: <http://www.politicargentina.com/notas/201801/24201-argentina-es-el-segundo-pais-mas-vulnerable-a-crisis-externas.html>].

[7]El Cronista (noviembre, 2017). Argentina, entre los cinco países más vulnerables a subas de tasas de la Fed”. [en línea: <https://www.cronista.com/finanzasmercados/Argentina-entre-los-cinco-paises-mas-vulnerables-a-subas-de-tasas-de-la-Fed-20171109-0022.html>].

[8]En un artículo publicado por “BAE Negocios” se menciona el factor clave que tuvo la sanción de la ley de mercado de capitales y un dólar menos atrasado – devaluación– para que BlackRock y Templeton participaran en la renovación de bonos del mes de mayo. [en línea: <https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/La-ley-de-mercado-de-capitales-clave-en-el-salvataje-de-BlackRock-y-Templeton-20180515-0077.html>].

[9]Ver gráfica en línea: <https://www.blackrock.com/cl/recursos/herramientas/blackrock-emerging-market-marker>.

[10]Indicador de Riesgo Soberano BlackRock en línea: <https://www.blackrockblog.com/blackrock-sovereign-risk-indicator/#>.

[11]Laura Alfaro, Pablo Guidotti, Guillermo Perry, y Liliana Rojas-Suarez (julio, 2018). “La amenaza proteccionista de Trump a América Latina”. [en línea: <https://www.project-syndicate.org/commentary/us-china-trade-dispute-impact-latin-america-by-laura-alfaro-et-al-2018-07/spanish>].

[12]Nouriel Roubini (julio, 2018). “El peligro de Trump para la recuperación global”. [en línea: <https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-trade-war-and-the-global-economy-by-nouriel-roubini-2018-07/spanish>].

[13]Fondo Monetario Internacional (julio, 2018) “Informe: Perspectiva de la Economía Mundial”. [en línea: <http://www.imf.org/es/Publications/WEO>].

ARTÍCULO

Por Martín Calero



EL ETERNO RETORNO AL PATIO TRASERO. UN ANÁLISIS DE LA NUEVA POLÍTICA DE DEFENSA DEL MACRISMO.



Desde una redacción ambigua y modificando detalles que, a primera vista, no parecen ser significativos, el decreto 683/18 sancionado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) reconfiguró la normativa que establecía límites a las intervenciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en el ámbito de la seguridad interior. Por vía de este decreto, se sentaron las bases normativas para que el PEN pueda definir, para cada situación determinada y bajo cualquier contexto, qué o quiénes pueden ser considerados una amenaza externa, qué activos revisten carácter de recurso estratégico y cuáles son las acciones “logísticas” necesarias para apoyar el accionar de las fuerzas de seguridad.

Como hemos mencionado en notas anteriores, a esta vaguedad en la construcción de definiciones el texto del decreto incurre en un claro uso y abuso del término *terrorismo*. Sobre esta cuestión, creemos importante rescatar una síntesis realizada por la ex ministra de defensa Nilda Garré:

El decreto, “habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y para responder a ‘amenazas externas’, aun cuando estas no provengan de un Estado, como podría suceder con el delito organizado transnacional, tal como es el caso, por ejemplo, del terrorismo. De este modo se hace caso omiso de la resolución 3314 (1976) de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que ‘agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU’; promueve la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se adiestren y equipen para misiones

de seguridad interior, lo que está vedado por nuestro sistema legal; y habilita que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de protección de los objetivos de valor estratégico, misión que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad. En este último caso, se realiza una interpretación forzada del artículo 31 de la Ley de Defensa, que señala que es una misión de la Gendarmería y de la Prefectura la custodia de esos objetivos de valor estratégico para la Nación.”[1]

Sumado al Decreto N° 683/18, también fue aprobado el Decreto N° 703/18, que implementa la nueva Directiva Política de Defensa Nacional (DPDN). La DPDN tiene como principal función “establecer los criterios que orientarán la reforma de la organización, el funcionamiento, la planificación y la administración de los recursos humanos y materiales del Sistema de Defensa Nacional” [2]. Contraviniendo este objetivo, su documento fundacional prácticamente no contempla herramientas programáticas y, en cambio, propone análisis geopolíticos

superficiales y con sesgos notables. Un claro ejemplo de ello es el apartado *“Diagnóstico Regional”*, en el que se indica a la República Bolivariana de Venezuela como el principal responsable de *“atentar en contra de la consolidación de la zona de paz sudamericana, dado que afecta negativamente la estabilidad de la región, especialmente la de los países vecinos”*, consecuencia del *“régimen autoritario de su gobierno que viola de manera sistemática las libertades fundamentales y los derechos políticos de sus ciudadanos”* [3]. En un texto cargado de alusiones a las *“nuevas amenazas”*, la referencia a Venezuela es la *única* mención a un Estado Nación como potencial hipótesis de conflicto.

En el Capítulo III sobre prioridades y lineamientos para la reforma del Sistema de Defensa Nacional, la DPDN establece 6 tipos de operaciones prioritarias:

1. Vigilancia y control de los espacios soberanos,
2. Protección de Objetivos Estratégicos
3. Apoyo a la Política Exterior
4. Apoyo a la Seguridad Interior
5. Apoyo a la Comunidad

6. Apoyo a la generación de conocimiento científico.

Los puntos 3 y 4, en esencia, sientan las bases de para aumentar la injerencia del Comando Sur de Estados Unidos en el país. El punto 3 prioriza la realización de ejercicios militares conjuntos con la Fuerza de Paz Argentino-Chilena *“Cruz del Sur”* e incrementa la participación en materia de defensa en la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que históricamente ha funcionado como correa de transmisión de los intereses estadounidenses en América Latina. En el punto 4, el Decreto N° 703/18 introduce dos referencias poco claras sobre el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control fronterizo y la contribución a través de tareas de apoyo logístico, a requerimiento de las operaciones desplegadas bajo la conducción del Sistema de Seguridad Interior. Por último, no queremos dejar de mencionar lo que establece el punto b) de dicho apartado en relación a la protección de eventos de interés estratégico, destacándose la reunión de Jefes de Estado del G-20 programada para noviembre del año en curso, para la cual Argentina ya adquirió en mayo 5

aviones de combate a la República de Francia[4].

En su última visita a la Argentina, el Secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, afirmó: *“Vine aquí para escuchar y atender para forjar un futuro lleno de trabajo en equipo militar en todas las fuerzas. Cuando haya un problema estaremos juntos para ayudarnos”*[5]. En ese sentido, es importante volver tanto sobre el “Diagnóstico Regional” realizado por la DPDN, en el cual se establece que el único “problema” capaz de desestabilizar la región es Venezuela, como sobre las declaraciones del actual embajador argentino en los Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, al momento de asumir funciones: *“EE.UU tiene hacia nosotros un interés político, y nosotros tenemos hacia ellos un interés económico. A EE.UU. le interesa el tema de la seguridad, el apoyo internacional, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (...) El desafío está en poder trabajar con ellos dándoles satisfacciones a los intereses que ellos tienen con respecto a nosotros, y al mismo tiempo, de una forma diplomática, que eso se traduzca en una actitud más bien positiva con*

respecto a nuestra agenda económica” [6]. Habrá que comprobar hasta qué punto está dispuesto a llegar Argentina bajo este esquema de “compensaciones cruzadas”. Más aún en una coyuntura en la que se multiplican los viajes para solicitar auxilio financiero a Donald Trump, personaje que no se caracteriza por dar sin esperar nada a cambio, sino todo lo contrario.

Notas

[1] Recuperado de: <https://www.elcohetelaluna.com/bajo-la-tutela-de-washington/>

[2] Recuperado de: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312871/norma.htm>

[3] DIRECTIVA DE POLITICA DE DEFENSA NACIONAL. ANEXO I. Pág. 10 de 39

[4] <https://www.lanacion.com.ar/2133764-el-gobierno-autorizo-la-compra-de-cinco-aviones-de-combate-a-francia>

[5] Recuperado de: <https://www.infobae.com/politica/2018/08/15/el-secretario-de-defensa-de-eeuu-califico-a-argentina-como-un-socio-de-washington-y-pidio-estrechar-la-colaboracion-militar/>

[6] https://www.clarin.com/politica/nuevo-embajador-washington-interes-ee-uu-argentina-politico-economico_0_HJ1Nes8NG.html.

Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior.

Informe Mensual – Número 4.

09 de septiembre de 2018.

Buenos Aires, Argentina.

www.ocipex.wordpress.com

Contacto: www.facebook.com/ocipex

